

RIESGO POLÍTICO AMÉRICA LATINA₂₀₂₆



Jorge Sahd K.
Daniel Zovatto
EDITORES

RIESGO POLÍTICO AMÉRICA LATINA

2026

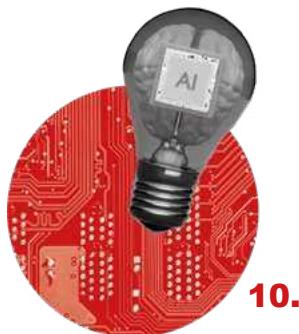
Jorge Sahd K.

Daniel Zovatto

EDITORES

Centro UC
Estudios Internacionales
CEIUC





Índice

Prólogo	5
1. Crimen organizado y captura del Estado	16
2. Violencia política y erosión democrática.....	20
3. Vulnerabilidad fiscal de los Estados	23
4. Instrumentalización política de la migración.....	26
5. Fragilidad ante el cambio climático.....	29
6. Debilitamiento del sistema internacional y redefinición del comercio global	32
7. Creciente presión de EE.UU. y China sobre la región	35
8. Escalada de tensión regional.....	38
9. Fragmentación regional y pérdida de peso a nivel global....	41
10. Falta de capacidad frente a la inteligencia artificial.....	44
Calendario electoral de América Latina 2026	47
Comparación de riesgos 2021-2026	48
Nota metodológica	49
Agradecimientos.....	49
Editores	50
Equipo redactor.....	50

Prólogo

Otro año marcado por la incertidumbre y la volatilidad, pero al mismo tiempo decisivo

El Informe de Riesgo Político América Latina cumple su sexto año consolidándose como una herramienta de referencia en la región para gobiernos, empresas e inversionistas que buscan tomar decisiones informadas en un entorno crecientemente volátil e incierto. A lo largo de este período, el reporte ha construido un marco analítico integral que permite identificar con mayor precisión los principales riesgos políticos, las vulnerabilidades estructurales y las oportunidades estratégicas que marcarán el rumbo de América Latina en los próximos doce meses.

El año 2026 se perfila como un punto de inflexión para la región, tanto por la complejidad del escenario global como por la convergencia de profundas transformaciones políticas, electorales, económicas y sociales en el ámbito latinoamericano. La transición hacia un sistema internacional más fragmentado, competitivo y menos previsible —cada vez más condicionado por la rivalidad entre grandes potencias— configura un entorno geopolítico caracterizado por dinámicas de poder más crudas y menos reguladas, cercano a una auténtica “ley de la jungla”.

En este contexto, se vuelve indispensable para gobiernos, empresas e inversionistas contar con una lectura rigurosa de los riesgos políticos y de las oportunidades estratégicas que definirán el desempeño económico y el comportamiento de los mercados latinoamericanos a lo largo del presente año.

En paralelo, América Latina transitará el segundo año del actual superciclo electoral (2025–2027), en un marco de crecimiento económico mediocre y un clima social particularmente desafiante. Si bien este entorno plantea riesgos significativos, también abre una ventana de oportunidad para repositionar a la región como un actor relevante en la economía internacional, siempre que los países logren ofrecer estabilidad política y gobernabilidad efectiva, previsibilidad económica y regulatoria, seguridad jurídica y entornos de negocios favorables.

Un contexto global en transformación acelerada

El devenir de América Latina en 2026 estará fuertemente condicionado por la evolución política de Estados Unidos y por su postura tanto frente a Venezuela —y el efecto dominó que esta tenga eventualmente en otros países de la región— como frente a China y Rusia.

La visita del presidente Trump a Pekín en abril, así como las elecciones legislativas estadounidenses de medio término en noviembre, serán hitos con impactos sistémicos sobre la arquitectura económica y de seguridad global. A medida que avance el segundo año de su mandato, comenzarán a hacerse más visibles los efectos acumulados de sus decisiones en materia de comercio, clima, seguridad fronteriza, combate al narcotráfico y política exterior, todas ellas con repercusiones directas en América Latina.

El escenario internacional en 2026 continuará determinado por una transición de poder global marcada por la erosión del orden liberal construido después de 1945, la intensificación de la competencia estratégica entre grandes potencias y la redefinición de los marcos de gobernanza global. En este contexto, América Latina —actualmente situada en la periferia del sistema internacional— enfrenta una doble presión: por un lado, el debilitamiento de las instituciones multilaterales que tradicionalmente han amparado sus intereses; por otro, la creciente disputa entre Estados Unidos y China por influencia geopolítica, acceso a recursos estratégicos y control de cadenas de suministro críticas.

La segunda administración del presidente Trump ha ido acelerando estas dinámicas. Desde su retorno a la Casa Blanca, ha impulsado un replanteamiento profundo de la política exterior estadounidense, basado en una lógica unilateral, transaccional, orientada al poder duro, al debilitamiento del multilateralismo —como se observa en la salida masiva de múltiples organizaciones internacionales— y a maximizar los intereses de American First. Para decirlo en palabras del informe Top Risks 2026 de Eurasia Group: “2026 es un punto de inflexión. (...) No porque sepamos cómo termina esto, sino porque empezaremos a ver qué sucede cuando el país que escribió las reglas decide que ya no quiere jugar según ellas. (...) La mayor fuente de inestabilidad global no será China, Rusia, Irán ni los casi 60 conflictos que arden en el planeta —la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial—. Será Estados Unidos”.

La “Doctrina Donroe”, el “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe y la nueva Estrategia de Seguridad Nacional: el caso de Venezuela

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos adoptada en diciembre de 2025 y el “Corolario Trump” sumada al ataque aéreo lanzado en la madrugada del 3 de enero — luego de meses de presión sostenida, sanciones, un amplio despliegue naval y un bloqueo petrolero total—contra distintos objetivos militares en Venezuela y la posterior captura del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y el traslado de ambos a un juzgado federal en Nueva York para enfrentar cargos criminales marca el inicio de una nueva fase en la política hemisférica: la actualización de la Doctrina Monroe (1823) bajo los principios de la llamada doctrina “Donroe”. Esta última representa una mutación profunda: el hemisferio occidental (incluida Groenlandia) está bajo el dominio directo de los EEUU: en la estrategia arriba citada se menciona seis veces el término, “nuestro hemisferio” (“our hemisphere”). América Latina deja de ser presentada como socio y reaparece como teatro de operaciones en una disputa geopolítica de alta intensidad. Trump ya no pretende ejercer hegemonía sino dominación “con más garrotes que zanahorias, sin apelar a valores democráticos ni a principios juídicos”.

Ya no se trata de promover la democracia sino de asegurar recursos estratégicos, imponer alineamientos geopolíticos y ejercer control sobre territorios clave en función de la competencia global con China y Rusia. Venezuela se convirtió en el primer laboratorio de esta doctrina: el amplio despliegue naval-militar y la captura de Maduro marcaron la normalización de una política que subordina la legalidad internacional a la fuerza y privilegia la tutela política y el control de activos —especialmente energéticos— por sobre la soberanía y la institucionalidad democrática.

La novedad no radica únicamente en el uso de la coerción, sino en el modelo político instaurado tras la intervención. Washington optó por una administración indirecta del poder, manteniendo estructuras del chavismo bajo una obediencia condicionada a nuevos ataques y marginando a la oposición democrática encabezada por Edmundo González —presidente electo en julio de 2024— y María Corina Machado. **La lógica fue explícita: no se trata de democracia, sino de petróleo.**

Así, la doctrina “Donroe” representa una mutación doctrinaria de fondo: América Latina deja de ser presentada como socio estratégico y reaparece como teatro de operaciones dentro de una disputa geopolítica de alta intensidad, con rasgos propios de un imperialismo del siglo XXI.

Más allá del caso venezolano, lo que se advierte es el retorno a una lógica de época: la región vuelve al centro de la geopolítica global, pero no como actor, sino como espacio de disputa, enfrentando el desafío de preservar su soberanía política en un entorno internacional marcado por el “desorden” y dominado por relaciones de fuerza.

Desde la perspectiva del riesgo político, la doctrina “Donroe” introduce un factor de inestabilidad sistémica. Normaliza la intervención como herramienta legítima —en abierta violación de principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional Público— y altera los incentivos internos: gobiernos más expuestos a presiones externas, oposiciones más vulnerables a la instrumentalización y sistemas institucionales crecientemente frágiles.

China y la Unión Europea

China continuará avanzando en su estrategia de consolidación geoeconómica en América Latina mediante inversiones, financiamiento y acuerdos comerciales, especialmente en transición energética, infraestructura crítica, litio, cobre, agricultura y tecnología digital. Así lo revela el Policy Paper para América Latina, publicado en diciembre del año pasado. No obstante, un entorno global más polarizado y un Estados Unidos más asertivo podrían obligar a varios países latinoamericanos a recalibrar su relación con Beijing, generando nuevas tensiones políticas y dilemas de alineamiento estratégico.

En paralelo, la Unión Europea buscará preservar e incluso ampliar su presencia mediante la entrada en vigor del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, luego de 25 años de negociación. Aunque persiste incertidumbre respecto de su implementación plena, su puesta en marcha representará un punto de inflexión en las relaciones biregionales, con impactos significativos en sectores como la agricultura, la industria automotriz, las energías renovables y los servicios digitales. Para la UE, este acuerdo

es también un instrumento geopolítico para evitar una pérdida adicional de influencia frente a Estados Unidos y China.

En síntesis, el contexto internacional de 2026 estará definido por un sistema internacional más fragmentado, competitivo y orientado a relaciones de poder. América Latina deberá navegar entre un Estados Unidos más demandante, una China persistentemente activa, una Unión Europea que intenta recuperar espacio y un orden multilateral debilitado, evitando convertirse en mero objeto —y no sujeto— de esta disputa geopolítica. En este escenario cobra especial relevancia la elección del nuevo secretario o secretaria general de las Naciones Unidas, proceso en el que existe la expectativa de que la rotación geográfica favorezca a América Latina, lo que abriría una ventana de oportunidad diplomática excepcional para la región.

Estados Unidos en 2026: segundo año de Trump y las elecciones de medio término

El escenario interno de Estados Unidos será un factor decisivo para América Latina en 2026. **Trump enfrentará un año políticamente definitorio, marcado por las elecciones legislativas de medio periodo de noviembre**, un proceso que podría reconfigurar el control del Congreso y, con ello, condicionar de manera directa la capacidad del Ejecutivo para implementar su agenda durante la segunda mitad del mandato.

A lo largo de 2025, el presidente Trump sentó las bases de una política doméstica orientada a una combinación de expansión del poder ejecutivo, proteccionismo económico, endurecimiento de las políticas de seguridad interna, una retórica nacionalista que ha reordenado las prioridades de la administración, y presión sistemática sobre aliados y adversarios. En 2026 comenzarán a observarse con mayor claridad los efectos acumulados de estas decisiones, especialmente en los ámbitos económico, comercial, migratorio, fiscal y financiero, con implicaciones directas para la región.

Las elecciones de medio término constituirán el hito más relevante del calendario político estadounidense. Sus resultados determinarán el grado de gobernabilidad del presidente Trump de cara a la segunda y última parte de su mandato, la orientación de su agenda legislativa y la estabilidad del escenario político interno. Un resultado favorable para el oficialismo republicano reforzaría un contexto en el cual Estados Unidos podría ejercer un liderazgo hemisférico más unilateral, coercitivo y transaccional, con mayores presiones hacia los gobiernos latinoamericanos. En cambio, un retroceso republicano —particularmente si implica la pérdida de una de las cámaras o de ambas— podría aumentar la incertidumbre, la polarización y el margen de conflicto institucional dentro de Washington, generando un entorno más volátil e impredecible para la política exterior y, por extensión, para la relación bilateral y regional con América Latina.

Un año electoral decisivo en la región

Cuatro países —Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil— celebrarán elecciones generales a lo largo de 2026. También existe la posibilidad de que haya elecciones en Haití si las condiciones de seguridad lo permiten. Estos procesos ocurren en un entorno económico de crecimiento mediocre y en un clima social donde persisten desigualdades, altos niveles de informalidad y una confianza erosionada tanto en los gobiernos como en las instituciones. Esta combinación genera volatilidad política y demanda una vigilancia más estrecha por parte de inversionistas y actores económicos, especialmente en mercados con marcos regulatorios cambiantes o con historial de incertidumbre política.

El papel que pueda jugar el presidente Trump en algunos de estos procesos —ya evidenciado en 2025 en las elecciones legislativas de Argentina y en las presenciales de Honduras— añade un factor adicional de atención, dado el alcance regional de sus posicionamientos públicos y la sensibilidad de algunas agendas políticas locales frente a discursos externos.

Los resultados de estas cuatro elecciones permitirán evaluar si se consolidan varias tendencias observadas en el ciclo electoral anterior: el voto mayoritario de castigo a los oficialismos —independiente de su signo político— y por ende mayor alternancia, así como la creciente fragmentación y polarización política. Aunque estas tendencias son mayoritarias durante los últimos años, no se manifiestan de manera uniforme por lo que es recomendable analizar cada proceso en función de su contexto político, institucional y socioeconómico.

Asimismo, habrá que evaluar si continuará el desplazamiento de amplios sectores del electorado hacia opciones de centroderecha o derecha, motivado por demandas de orden, seguridad y crecimiento económico como hemos visto en varios países: Paraguay, Argentina y Ecuador en 2023; El Salvador, República Dominicana y Panamá en 2024; y el año pasado nuevamente en Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras. Sin embargo, esta inclinación convive con la fragilidad persistente de las coaliciones políticas, la volatilidad del voto y la dificultad para construir mayorías estables en contextos altamente fragmentados.

Un elemento central del ciclo electoral 2026 es que, de las cuatro elecciones presidenciales programadas, sólo en una —Brasil— el actual presidente, Lula, está habilitado y dispuesto a buscar la reelección inmediata. En Costa Rica, Perú y Colombia la reelección consecutiva está constitucionalmente prohibida, lo que obliga a los oficialismos a competir sin la ventaja que otorga la continuidad del actual mandatario y abre espacios más amplios para alternancias, recomposiciones partidarias y liderazgos emergentes. Esta diferencia estructural introduce dinámicas de competencia muy distintas: mientras la elección brasileña seguramente se convertirá en un referéndum sobre la gestión de Lula, los otros tres países se orientan hacia disputas más abiertas.

A esta heterogeneidad institucional se suma un factor transversal: la muy alta fragmentación partidaria y el elevado nivel de electores indecisos en Costa Rica, Perú y

Colombia. En los tres países, el sistema político llega al 2026 debilitado tras ciclos de crisis, escándalos, polarización y rotación acelerada de liderazgos. Las encuestas recientes muestran que, en todos ellos, el número de organizaciones con aspiraciones presidenciales es inusualmente alto y domina una masa significativa de votantes que aún no define preferencias —un signo de desafección, pero también de volatilidad. En contextos así, la primera vuelta tiende a producir resultados atomizados, con diferencias estrechas entre múltiples candidatos y sin que ninguno logre construir mayorías claras en el Legislativo lo cual luego se traduce en niveles complejos y desafiantes de gobernabilidad.

Finalmente, hay otro patrón común: los cuatro países prevén segunda vuelta, aunque con reglas diferentes. Costa Rica utiliza un umbral menor al habitual: 40% de los votos válidos. Perú, Colombia y Brasil, en cambio, requieren la fórmula clásica de 50% + 1 voto. Dada la fragmentación, la falta de “candidatos naturales” salvo en Brasil y el voto indeciso dominante, es altamente probable que en las cuatro elecciones la Presidencia se defina en segunda vuelta y no hay que descartar la posibilidad de que en algunas de ellas haya reversión de resultado, es decir que quien gana en primera vuelta luego es derrotado en el balotaje.

Tres desafíos estructurales para la estabilidad democrática y económica

El análisis regional confirma la persistencia de tres factores que condicionarán la gobernabilidad y el comportamiento de los mercados:

- Crisis de representación y erosión de la confianza. La legitimidad institucional, la confianza en las élites, los gobiernos y las instituciones, y la satisfacción con el desempeño democrático siguen debilitándose. Esto alimenta ciclos de protesta, reduce la capacidad gubernamental para implementar reformas y aumenta la percepción de riesgo entre actores económicos. La desconfianza hacia los políticos, los partidos y los poderes del Estado seguirá siendo una fuente significativa de riesgo, alimentando dudas sobre la efectividad de la gobernanza democrática y sobre la capacidad de los Estados para responder de manera efectiva y oportuna a los principales desafíos sociales.
- Gobernabilidad fragmentada y polarización creciente. Sistemas políticos altamente fragmentados generan dificultades para producir acuerdos, obstaculizan reformas estructurales y pueden derivar en políticas públicas erráticas o inconsistentes. La polarización política se mantendrá como uno de los problemas más extendidos de la región, especialmente en los países que celebrarán elecciones durante este año. Dicha polarización dificulta la construcción de consensos mínimos, bloquea reformas institucionales y económicas indispensables y deteriora la calidad del debate público. A su vez, es previsible que en varios países se intensifiquen las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, impulsadas por maniobras políticas, confrontaciones institucionales y estrategias de obstrucción legislativa en períodos preelectorales. Este deterioro puede agravar el clima político y aumentar la incertidumbre en torno a la capacidad de los gobiernos para sostener sus agendas de gobernabilidad.

- Expansión y sofisticación del crimen organizado. La violencia, la corrupción y la debilidad del Estado de derecho impactan directamente la seguridad jurídica, la competitividad, los costos operacionales y la capacidad de atraer inversión extranjera. El crimen organizado se consolida como un factor transversal de riesgo, con efectos en logística, comercio, seguridad urbana y gobernanza. En numerosos países, el crimen organizado ha adquirido capacidades de control territorial, influencia política y presencia tanto en economías ilícitas como lícitas. En algunos casos, interviene de manera directa en procesos electorales mediante financiamiento ilegal, coacción, violencia o penetración institucional, lo que profundiza la erosión del Estado de derecho.

Finalmente, persiste un riesgo sistémico que atraviesa a la región: la creciente desconexión entre ciudadanía y sistemas políticos. La frustración democrática —alimentada por pobreza persistente, desigualdad, informalidad y servicios públicos insuficientes— seguirá constituyendo un terreno fértil para discursos antisistema, propuestas de tipo punitivista, experimentos populistas o alternativas de corte gerencial que prometen orden y eficiencia frente al desgaste de las élites tradicionales

El panorama económico: crecimiento mediocre, heterogeneidad y nuevas presiones externas

En 2026, la economía mundial seguirá registrando un crecimiento moderado —en torno al 3,2 % según la proyección de octubre del FMI—, en un contexto marcado por tensiones persistentes en los mercados energéticos, presiones inflacionarias que aún no se disipan por completo, una reducción gradual de las tasas de interés y una progresiva reorientación de los flujos de capital hacia geografías que ofrezcan mayor resiliencia, diversificación y seguridad jurídica.

En América Latina, el FMI anticipa para 2026 una expansión regional cercana al 2,2 %-2,4 %, en línea con el desempeño observado entre 2022 y 2023. Se trata de un crecimiento modesto, heterogéneo y altamente vulnerable a shocks externos, reflejo de problemas estructurales persistentes: baja productividad, inversión insuficiente, escaso dinamismo tecnológico y debilidades institucionales. Como bien señala el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, sin avances sostenidos en estos frentes la región corre el riesgo de perpetuar su patrón histórico de crecimiento crónicamente bajo y de no lograr escapar de la triple trampa del desarrollo en la que se encuentra desde hace varios años.

Aun así, diversos analistas —incluido el más reciente informe de JPMorgan— subrayan que 2026 podría marcar un punto de inflexión estratégico, en un escenario global en el que América Latina ya no puede ser descrita únicamente como un proveedor periférico de materias primas. Según este análisis, la región emerge como un actor estructural dentro de la nueva configuración económica derivada de la transición energética, la revolución tecnológica y la reorganización de las cadenas globales de valor. En este marco, América Latina aparece con mayor nitidez en el radar de inversionistas interesados en activos estratégicos —energía, alimentos, minerales críticos y tierras raras—, así como en infraestructura, servicios digitales y oportunidades asociadas a la transición energética.

El informe parte de un diagnóstico global claro: el sistema internacional avanza hacia una recomposición del comercio mundial, impulsada por las tensiones geopolíticas, la competencia entre Estados Unidos y China, y una demanda creciente de insumos estratégicos derivada de la aceleración tecnológica —con la inteligencia artificial como motor central—. En este contexto, América Latina, y particularmente Sudamérica, se posiciona como un nodo relevante gracias a la combinación de recursos naturales, capacidad exportadora y una ubicación geoeconómica estratégica. Según JPMorgan, la transición hacia un orden post-hiperglobalización ha transformado lo que históricamente fueron vulnerabilidades —dependencia de recursos, localización periférica y concentración exportadora— en potenciales fuentes de fortaleza estratégica.

De este modo, la región continúa siendo una de las áreas más atractivas para inversores que buscan diversificación, retornos competitivos y exposición a sectores clave, apoyándose en: i) la proximidad geográfica a Estados Unidos; ii) reservas relevantes de minerales críticos; iii) un amplio potencial energético (fósil, renovable y verde); iv) capacidades agrícolas y alimentarias de escala global; v) fronteras emergentes de innovación digital y ecosistemas emprendedores dinámicos; y vi) un rol creciente en servicios ambientales y soluciones basadas en la naturaleza.

Sin embargo, esta ventana de oportunidad viene acompañada de riesgos significativos. La fragmentación geoeconómica, la rivalidad entre grandes potencias y la aceleración tecnológica generan presiones comerciales, mayor volatilidad de precios, incertidumbre en la demanda global y exigencias crecientes sobre infraestructura, logística y calidad institucional. A ello se suma un dilema geoestratégico de primer orden: la superposición de intereses comerciales con Estados Unidos y China exige una diplomacia económica cuidadosa, especialmente considerando que muchos países de la región mantienen déficits estructurales con Washington mientras profundizan sus vínculos con Beijing.

A estos factores externos se agregan los riesgos internos: limitaciones logísticas, baja sofisticación productiva, escaso valor agregado, déficits en gobernanza y una institucionalidad que, en numerosos casos, no está preparada para gestionar flujos masivos de inversión ni para diseñar e implementar políticas industriales de largo plazo. La abundancia de recursos, por sí sola, no garantiza transformación productiva, diversificación económica ni bienestar social.

Si los países de la región logran fortalecer su institucionalidad, mejorar sus marcos regulatorios y avanzar hacia una mayor cooperación regional, 2026 podría convertirse en un año de repositionamiento estratégico, con beneficios tanto para la estabilidad política como para el dinamismo económico.

La situación social: pobreza persistente, desigualdad estructural. Alta informalidad y malestar ciudadano

En el plano social, América Latina ingresa a 2026 con una combinación de avances significativos y desafíos persistentes. En 2024, la región alcanzó su menor tasa de pobreza monetaria desde que se dispone de datos comparables: un 25,5 % de la población, equivalente a cerca de 160 millones de personas, vivía bajo la línea de pobreza (CEPAL). Esto supone una reducción de 2,2 puntos porcentuales respecto de 2023 y de más de siete puntos en comparación con 2020, en plena pandemia. La pobreza

extrema también retrocedió hasta 9,8 %, mientras que la pobreza multidimensional (que incorpora carencias en salud, educación, vivienda, empleo y pensiones) cayó del 34,4 % al 20,9 % en la última década, reflejando mejoras en la calidad de vida de millones de personas. Este progreso socioeconómico ha sido heterogéneo y se explica, en gran medida, por el incremento de los salarios reales, la recuperación del empleo —que creció 1,8 % en 2024— y la reactivación de sectores dinámicos como la manufactura y los servicios financieros.

Sin embargo, una mirada de más largo plazo muestra que la pobreza está estancada mientras la pobreza extrema se mantiene sin retroceder significativamente durante la última década y media (CAF); la informalidad laboral sigue siendo muy elevada —afectando a casi la mitad de los trabajadores— y golpea especialmente a mujeres, jóvenes y ocupaciones de baja remuneración, limitando el acceso a protección social, salud y pensiones. Esta situación evidencia que, pese a las mejoras, amplios sectores continúan expuestos a vulnerabilidades estructurales.

En este contexto, y pese a ciertos avances, **la insatisfacción ciudadana continuará siendo un componente central del clima político regional. La combinación de desigualdad estructural, informalidad extendida, percepción de corrupción, inseguridad y falta de oportunidades alimenta un malestar social que se refleja en la volatilidad electoral, el debilitamiento del centro político y la proliferación de discursos antisistema o altamente polarizantes**. Frente a ello, como bien señala el presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados, la región debe romper este ciclo de estancamiento y de conformidad, mediante un crecimiento económico robusto y sostenido —superior al 4% anual— y una mayor integración para reactivar la inversión y el desarrollo inclusivo.

A ello se suman tensiones migratorias persistentes, crisis humanitarias localizadas, presiones crecientes sobre los sistemas de salud y educación, y desafíos derivados del cambio climático, cuyos impactos afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. Todo ello conforma un escenario social complejo, en el que los avances recientes coexisten con fragilidades profundas que condicionarán la gobernabilidad y la estabilidad democrática durante 2026.

Integración regional y posicionamiento internacional: entre el riesgo y la oportunidad

El año 2026 será también crucial para evaluar la capacidad de América Latina de actuar colectivamente en un entorno internacional crecientemente adverso. Durante la última década, los esfuerzos de integración regional han experimentado un deterioro evidente, producto de divergencias ideológicas persistentes, fragmentación institucional, agendas nacionales inconexas y la ausencia de liderazgos capaces de articular una visión común. Pero el contexto global actual —marcado por la competencia estratégica entre grandes potencias, la reconfiguración geoeconómica y el debilitamiento del multilateralismo— exige exactamente lo contrario: más cooperación, mayor coordinación y una articulación estratégica mucho más ambiciosa.

Hoy, América Latina se encuentra, como advirtió el propio presidente Lula, “balcanizada”. Revertir esta fragmentación no es solo deseable: es imprescindible para recuperar peso, voz e influencia en un sistema internacional que se reorganiza aceleradamente. La región necesita aspirar a una “América Latina independiente”, dotada de una doctrina propia, con capacidad para actuar con autonomía frente a presiones externas y para plantear posiciones comunes en los grandes debates globales.

En consecuencia, la región debe revitalizar y modernizar sus espacios de diálogo, coordinación e integración y dotarlos de mayor capacidad operativa. Asimismo, es fundamental fortalecer los mecanismos de cooperación en áreas críticas como seguridad, migración, transición energética, combate al crimen organizado, infraestructura digital, integridad electoral y resiliencia climática. La falta de articulación regional no solo reduce la capacidad de influencia internacional de América Latina, sino que también limita la eficacia de sus respuestas internas frente a crisis políticas, económicas, sociales y de seguridad cada vez más complejas.

Al mismo tiempo, existen oportunidades estratégicas que la región puede —y debe— aprovechar: la coyuntura energética global y el interés renovado por los minerales críticos; el enorme potencial latinoamericano en energías renovables; la posibilidad de posicionarse como destino privilegiado del near-shoring en el marco de la reorganización de cadenas globales de valor y sus implicaciones económicas y geopolíticas. Sin embargo, estas oportunidades solo podrán materializarse si América Latina logra articular liderazgos políticos sólidos, una visión estratégica compartida y mecanismos institucionales capaces de convertir el potencial económico en cooperación efectiva, integración real y posicionamiento internacional sostenido.

Por su parte, el ataque a Venezuela y las acciones subsiguientes del gobierno norteamericano traen consecuencias regionales significativas. Venezuela funciona como caso testigo de una doctrina de disuisión ampliada que proyecta advertencias tanto hacia países con presidentes electos democráticamente como Colombia y México, así como para dictaduras como Cuba y Nicaragua. El mensaje es claro: Washington está dispuesto a usar poder duro para redefinir alineamientos en su esfera de influencia. Esto eleva el riesgo geopolítico en 2026, reduciendo los márgenes de autonomía de la política exterior latinoamericana, debilitando el multilateralismo y el regionalismo —en particular a la ONU y OEA— e intensificando la competencia entre Estados Unidos y China en la región. Lejos de estabilizar, esta dinámica puede producir más polarización, militarización y exposición a conflictos indirectos.

Conclusión: otro año marcado por la incertidumbre y la volatilidad pero al mismo tiempo decisivo

América Latina enfrentará 2026 en un entorno global y regional particularmente desafiante. El segundo año del gobierno del presidente Trump, la redefinición acelerada del orden internacional, un crecimiento económico promedio regional mediocre, la persistencia de la desigualdad estructural, la expansión del crimen organizado y un nuevo tramo del superciclo electoral conforman un conjunto de factores que, en su interacción, condicionarán la trayectoria política, económica y social de la región. La simultaneidad de estos procesos amplifica los riesgos y reduce los márgenes de maniobra de los gobiernos, al tiempo que exige respuestas más coordinadas y estratégicas.

Sin embargo, junto a estos riesgos emergen oportunidades significativas para reposicionar a América Latina en el escenario global, dinamizar su economía, relegitimar sus instituciones, fortalecer la gobernabilidad democrática y profundizar su integración regional. El desafío central radicará en la capacidad de los liderazgos latinoamericanos para identificar y aprovechar estas oportunidades, gestionar tensiones internas y externas, y construir consensos mínimos que permitan navegar con mayor estabilidad un entorno crecientemente incierto y competitivo.

2026, en suma, no será un año más. Será un punto de inflexión en el que se pondrán a prueba la resiliencia institucional, la adaptabilidad económica, la estabilidad política y la madurez estratégica de América Latina en un mundo en plena reconfiguración. Si la región actúa de manera fragmentada, continuará perdiendo visibilidad, influencia y relevancia internacional. Pero si logra articular agendas mínimas comunes, fortalecer sus capacidades de coordinación y aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo contexto geopolítico, podrá avanzar hacia una trayectoria más equilibrada, sostenible y estratégica de cara al final de la década.



Jorge Sahd K.
Director CEIUC
Coeditor Riesgo Político



Daniel Zovatto
Investigador senior CEIUC
Coeditor Riesgo Político

1.

Crimen organizado y captura del Estado



América Latina exhibe una paradoja estructural: combina un bajo nivel de conflicto interestatal con niveles persistentemente altos de violencia intrastatal. De acuerdo con InSight Crime, en 2024 se registraron 121.695 homicidios, lo que sitúa la tasa promedio regional en 20,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi tres veces y media el promedio mundial. Esta violencia no es episódica ni marginal, sino un fenómeno sistémico que afecta la gobernabilidad, la seguridad ciudadana y la calidad de las democracias.

La jornada de caos y violencia vivida en Río de Janeiro en octubre de 2025 —con al menos 132 fallecidos, incluidos cuatro agentes policiales, 113 detenidos y el despliegue de 2.500 efectivos— constituye una confirmación de una tendencia advertida en el Informe de Riesgo Político América Latina 2025: **el crimen organizado se ha consolidado como el principal riesgo político de la región.**

La capacidad de adaptación, diversificación económica y penetración territorial del crimen organizado varía según los incentivos locales, la debilidad institucional y el grado de captura del Estado. La escasez de datos robustos y comparables limita la coordinación interinstitucional para investigar y sancionar estos delitos, debilitando especialmente a los sistemas judiciales latinoamericanos. Asimismo, la ausencia de indicadores de desempeño estructurales —como tasas de condena, duración de los procesos judiciales o acceso efectivo a defensa jurídica— incentiva respuestas operativas de corto plazo, en desmedro de estrategias orientadas a desarticular redes criminales de alto nivel.

Según datos del Ministerio del Interior de Ecuador, entre las economías ilegales más relevantes de la región destacan el tráfico de armas, con una movilización estimada de USD 1.038.383, y el contrabando y comercio ilícito, que alcanza USD 38.699.362. Estas actividades no solo generan rentas criminales significativas, sino que erosionan la recaudación fiscal, distorsionan mercados y profundizan la corrupción institucional.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (2025), el crimen organizado en América Latina se manifiesta a través de múltiples economías ilícitas interconectadas, con impactos directos sobre la seguridad y el desarrollo. La trata de personas vinculada a la migración forzada representa un

Eventos relacionados con economías criminales 2024

Fuente: Centro de Investigación Monitoreo y Análisis del Comercio Ilegal, Ministerio del Interior Ecuador (2025).

* Valores en cero o sin datos para Venezuela responden a la falta de información oficial pública y verificable, no a la inexistencia del fenómeno.

PAÍS	Nº EVENTOS	MIGRACIÓN (personas)	TRÁFICO DE ARMAS (und.)	PESCA ILEGAL (kg)	MINERÍA ILEGAL (#material)	CONTRABANDO (usd)
COLOMBIA	238	260	65.711	14.731	345	\$8.972.533
PERÚ	58	8	27	93.115	136	\$3.227.855
ARGENTINA	52	-	2.849	18.995	-	\$1.139.297
ECUADOR	34	0	1.498	500	95	\$72.188
MÉXICO	27	5.941	11.880	1.351	1	\$13.158.699
BRASIL	23	9	220	44.700	1	\$943.856
PANAMÁ	21	153	511	354	-	\$147.295
ESTADOS UNIDOS	17	172	50.639	1.198	-	\$2.400
CHILE	15	-	3	23.641	-	\$3.483.915
REPÚBLICA DOMINICANA	14	75	900.000	0	-	\$5.461.146
PARAGUAY	13	0	2.600	0	-	\$165.964
URUGUAY	11	.	1.154	0	-	\$792.033
PUERTO RICO	10	483	0	0	-	\$0
BOLIVIA	8	-	426	0	-	\$649.335
HONDURAS	4	-	756	200	-	\$363.688
EL SALVADOR	3	-	63	0	-	\$2.300
CUBA	2	48	0	0	-	\$0
GUATEMALA	2	-	0	0	-	\$116.8858
VENEZUELA*	2	-	46	0	-	-
HAITÍ	1	40	0	0	-	\$0
TOTAL	555	7.199	1.038.383	198.785	578	\$38.699.362

riesgo creciente en corredores críticos como el Tapón del Darién, mientras que en México, Centroamérica y la frontera sur de Estados Unidos, estas rutas se encuentran bajo control de organizaciones armadas.

En paralelo, la minería ilegal, asociada al comercio ilícito de mercurio, mantiene vínculos con redes financieras transnacionales, con una expansión significativa en Perú, Ecuador y Venezuela. En la Amazonía brasileña, estas mafias impulsan la deforestación y el tráfico de fauna, profundizando el daño ambiental y la conflictividad social. A ello se suma el fuerte aumento de la extorsión empresarial, particularmente en Ecuador, donde este delito ha crecido un 400% en cuatro años, concentrándose

en territorios dominados por grupos como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiburones.

El Banco Mundial, en su informe *Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe* (2025), advierte que las organizaciones criminales transnacionales participan en una amplia gama de actividades ilícitas. Destacan nuevamente el tráfico de armas y el contrabando, este último equivalente a cerca del 2% del PIB regional, lo que dimite su impacto macroeconómico.

El crimen organizado también ha avanzado hacia una sofisticación tecnológica creciente, diversificándose mediante el cibercrimen, el uso de sistemas cifrados, aplicaciones de mensajería, drones y tecnología GPS, lo que permite monitorear

Tasa de homicidios en América Latina y el Caribe en 2024

*Datos cuestionables. Los datos de estos países no son confiables, están incompletos o miden los homicidios de forma que no es posible comparar sus tasas de homicidios con las de otros países.

Fuente: insightcrime.org

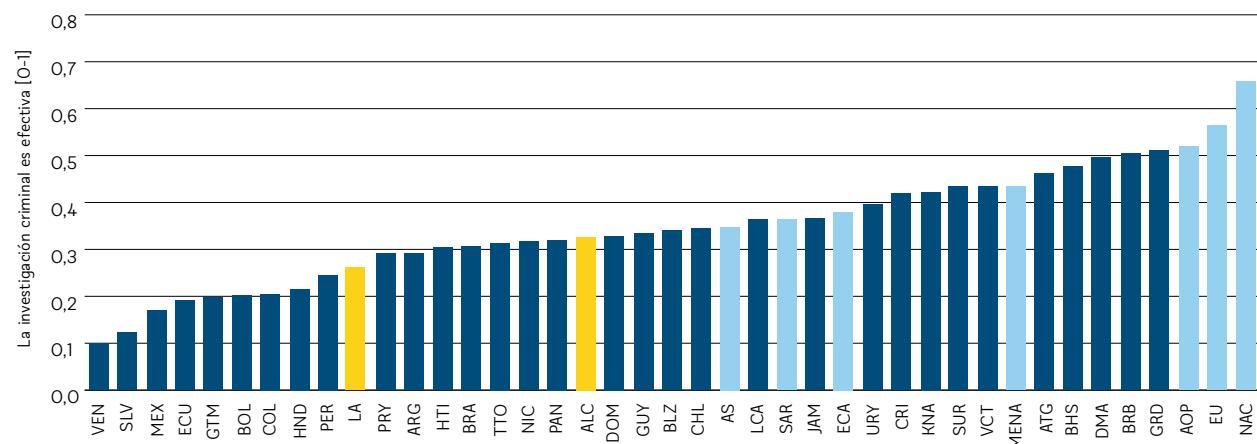
ISLAS TURCAS Y CAICOS	103,1
HAITÍ*	62,0
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES	59,8
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS	53,7
TRINIDAD Y TOBAGO	45,7
SANTA LUCÍA	42,8
JAMAICA	40,1
ECUADOR	38,8
SURINAM*	29,9
BAHAMAS	29,6
VENEZUELA*	26,2
HONDURAS	25,3
COLOMBIA	25,4
BELICE	21,7
BRASIL	21,1
MÉXICO*	19,3
BARBADOS	17,7
COSTA RICA	16,6
GUATEMALA	16,1
GUYANA	14,1
PUERTO RICO	15,3
PANAMÁ	12,9
URUGUAY	10,6
REPÚBLICA DOMINICANA	9,6
PERÚ	6,0
CHILE*	5,5
ARGENTINA	3,8
BOLIVIA*	3,0
EL SALVADOR*	1,9
PARAGUAY*	ND
NICARAGUA*	ND



A la mayoría de los países latinoamericanos les va mal en cuanto a la eficacia de sus sistemas de justicia criminal

El sistema de investigación criminal es efectivo [0-1]

Fuente: Indicadores de Justicia Criminal, 2023.



rutas, reclutar personas y evadir la acción de las autoridades.

Frente a este escenario, varios países han optado por respuestas de endurecimiento punitivo, combinando inversión en infraestructura carcelaria y militarización del sistema penitenciario. Costa Rica y Perú exploran modelos inspirados en el CECOT de El Salvador; Ecuador avanza en la construcción de dos cárceles de máxima seguridad; El Salvador consolida el CECOT con capacidad para 40.000 internos; y Estados Unidos evalúa incluso la reapertura simbólica de Alcatraz como señal de una política de “mano dura”.

Desde una perspectiva de riesgo político, las democracias latinoamericanas enfrentan una encrucijada crítica: o logran responder a esta amenaza estructural mediante políticas integrales —que articulen seguridad, inteligencia, fortalecimiento judicial, inclusión social y desarrollo económico, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho—, o la región permanecerá atrapada en un ciclo de violencia urbana crónica, que erosiona la legitimidad institucional, debilita la cohesión social y compromete su futuro democrático.

2.

Violencia política y erosión democrática



“La violencia política aparece cuando las instituciones dejan de ordenar el conflicto”, advierte la politóloga Laura Gamboa (2024). Esta premisa sintetiza uno de los riesgos más relevantes que enfrenta América Latina de cara a 2026: la progresiva normalización de la coerción como mecanismo de gobernanza. El problema ya no se limita a debilidades institucionales persistentes, sino que adopta una dimensión estructural, en la que dos formas de violencia —la criminal y la estatal— erosionan la democracia desde direcciones opuestas, pero con un resultado convergente: la anulación de la competencia política efectiva.

México y Ecuador ilustran con claridad la primera vertiente, asociada a la captura territorial por parte del crimen organizado. En estos casos, el Estado no actúa como agresor directo, sino como autoridad desplazada en espacios donde la soberanía se encuentra en disputa. Durante el ciclo electoral mexicano 2023-2024, Integralia Consultores (2024) documentó 782 agresiones y 34 asesinatos de actores políticos, cifras que evidencian un mecanismo de “selección adversa”, mediante el cual las organizaciones criminales vetan o imponen candidaturas a través de la violencia, asegurando control territorial antes incluso de la emisión del voto. **Ecuador reproduce esta lógica con un aumento sostenido de ataques contra alcaldes y autoridades locales (ACLED, 2024)**, lo que confirma que, en amplias zonas del país, la autoridad civil opera bajo una libertad condicionada por el crimen organizado. El riesgo hacia 2026 es la consolidación de “zonas grises” donde la soberanía estatal es formal, pero carece de contenido efectivo.

A esta dinámica se suma el caso de Colombia, que actúa como un recordatorio crítico de la vulnerabilidad democrática frente a la violencia selectiva de alto impacto. El asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, marca un punto de inflexión en el ciclo electoral de 2026. Tras sufrir un atentado armado durante un mitin en Bogotá en junio de 2025 y fallecer en agosto del mismo año, su muerte reactiva el trauma histórico del magnicidio y expone la capacidad de veto de los actores violentos sobre la oferta electoral (Suárez, 2025). Este crimen revela una estrategia de desestabilización en la que la eliminación física de un liderazgo opositor altera de manera irreversible la competencia

La mitad de Latinoamérica duda de la democracia

% de encuestados que creen que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno en 2024. 19.214 entrevistas presenciales a personas de 18 años o más con muestras nacionales representativas de la población de cada país (17 seleccionados) entre agosto y octubre de 2024.

Fuente: Latinobarómetro.



política, forzando la reconfiguración de candidaturas bajo un entorno de intimidación y coacción letal (Hernández Bonilla, 2025).

En el extremo opuesto de la violencia criminal se ubican Nicaragua y Venezuela, exponentes de la violencia estatal-institucional. En estos casos, la amenaza no surge de la ausencia de Estado, sino de su captura totalizante por parte del poder político. La coerción se centraliza, se legaliza

y se normaliza como herramienta para desmantelar la disidencia, configurando un “escenario terminal” de deterioro democrático: el aparato judicial y policial se transforma en un instrumento del partido gobernante, anulando cualquier posibilidad de alternancia y oposición real.

Ambas dinámicas convergen en un punto crítico: la distorsión de los incentivos democráticos. Según Latinobarómetro (2024), la insatisfacción con la

democracia alcanza al 52% de la población regional, revelando una ciudadanía crecientemente dispuesta a tolerar derivas autoritarias a cambio de orden o estabilidad. Esta predisposición valida, en algunos casos, enfoques de “mano dura” o normaliza la infiltración criminal si esta garantiza una percepción mínima de seguridad o desempeño económico. El informe de International IDEA (2024) confirma, en paralelo, retrocesos significativos en independencia judicial y libertad de prensa en la mayoría de los países de la región. De cara a 2026, el riesgo no se manifiesta principalmente en golpes de Estado clásicos, sino en la consolidación gradual de regímenes híbridos o abiertamente autoritarios.

El horizonte inmediato definirá si América Latina logra recomponer el monopolio legítimo de la fuerza o si deriva hacia sistemas políticos donde votar sigue siendo posible, pero elegir libremente deja de serlo. La inacción frente a esta doble vertiente de violencia contribuye a consolidar órdenes políticos en los que el poder efectivo ya no emana de las urnas, sino de la capacidad de coacción, ejercida por un cártel, un actor armado irregular o un decreto presidencial.

Ranking Democracia

Fuente: The Economist Intelligence Unit Limited 2025.

Ránking América Latina	Ránking Mundial	País	Puntaje general
01	15	URUGUAY 	8,67
02	18	COSTA RICA 	8,29
03	29	CHILE 	7,83
04	45	TRINIDAD Y TOBAGO 	7,09
05	47	PANAMÁ 	6,84
06	48	SURINAME 	6,79
07	49	JAMAICA 	6,74
08	52	REPÚBLICA DOMINICANA 	6,62
09	54	ARGENTINA 	6,51
10	57	BRASIL 	6,49
11	60	COLOMBIA 	6,35
12	69	GUYANA 	6,11
13	75	PARAGUAY 	5,92
14	78	PERÚ 	5,69
15	84	MÉXICO 	5,32
16	85	ECUADOR 	5,24
17	90	HONDURAS 	4,98
18	95	EL SALVADOR 	4,61
19	97	GUATEMALA 	4,55
20	103	BOLIVIA 	4,26
21	131	HAITÍ 	2,74
22	135	CUBA 	2,58
23	142	VENEZUELA 	2,25
24	147	NICARAGUA 	2,09

3.

Vulnerabilidad fiscal de los Estados



Bloomberg (2025) advierte que América Latina arrastra una carga de deuda pública cada vez más difícil de gestionar, marcada por un elevado costo de financiamiento en un contexto internacional menos favorable. De acuerdo con el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Brasil, Argentina y Bolivia mantienen niveles superiores al 80% del PIB, mientras que México, Argentina, Perú, Brasil y Colombia acumulan en conjunto cerca de seis billones de dólares de deuda, reflejando un endeudamiento regional que presiona los márgenes fiscales.

El panorama por país confirma vulnerabilidades estructurales que restringen la capacidad de maniobra de los gobiernos. Bolivia registra una deuda del 82% del PIB y enfrenta un inminente agotamiento de reservas internacionales, lo que exige una consolidación fiscal urgente y una corrección cambiaria impostergable. Colombia, con una deuda del 67%, ha mejorado sus ingresos gracias a la reforma tributaria, pero continúa enfrentando presiones fiscales persistentes. En Ecuador, pese a la reducción del 41% del aparato estatal mediante fusiones ministeriales y despidos, la deuda alcanza el 65% del PIB, reflejando que los ajustes administrativos no han sido suficientes para corregir desequilibrios fiscales de fondo. México, con una deuda del 57%, enfrenta crecientes presiones externas que dificultan la reducción sostenida del déficit y obligan a realizar ajustes más profundos para anclar una trayectoria descendente.

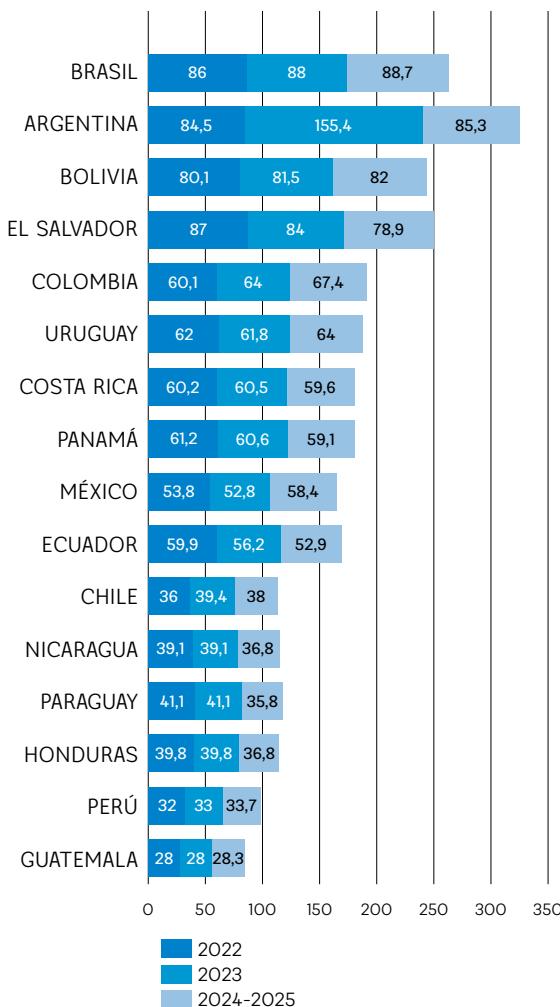
En contraste, Paraguay destaca como una excepción regional: mantiene una deuda pública baja y un estricto cumplimiento de su regla fiscal, lo que reduce vulnerabilidades y refuerza su posición entre los países más sólidos en sostenibilidad fiscal. Perú y Chile se sitúan en torno al 40% del PIB, aunque este último ha experimentado un incremento relevante en los últimos años, reflejo de mayores compromisos fiscales y menor dinamismo económico.

En Centroamérica, los niveles de endeudamiento son heterogéneos. El Salvador alcanza un 79% del PIB; Costa Rica bordea el 60%; y Panamá se ubica en 59%. Guatemala, Honduras y Nicaragua presentan niveles cercanos al 30%, influenciados por mercados financieros poco profundos, restricciones de acceso al crédito y marcos fiscales más estrechos.

Deuda pública bruta como % del PIB

Cifras promedio para los años analizados

Fuente: Instituto de Finanzas Internacionales (2025)



Un caso especialmente relevante es Brasil. El Banco Central identifica tres factores que explican el aumento de su deuda: el elevado impacto del costo de financiamiento —con tasas que alcanzaron un 15% interanual, su punto más alto en dos décadas—; el enfriamiento de la actividad económica; y la apreciación del real, que acumula un 13% desde inicios del año. Con una deuda de 89% del PIB, Brasil encabeza el ranking regional, seguido por Argentina (85%), donde la persistencia de subsidios extrapresupuestarios y el elevado costo de financiamiento en moneda extranjera continúan generando una carga fiscal difícil de revertir.

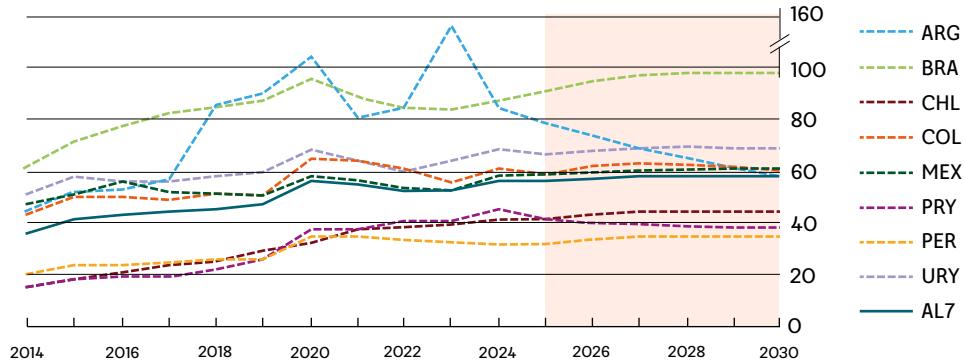
El Banco de España (2025) advierte que la alta exposición regional al dólar constituye una vulnerabilidad significativa: una depreciación brusca de la moneda estadounidense o un alza inesperada de tasas en EE. UU. podría encarecer el servicio de la deuda, restringir el acceso a financiamiento externo y generar tensiones de liquidez. Esta dependencia reduce el margen de maniobra monetaria y fiscal, especialmente en Centroamérica, cuyos países enfrentan condiciones financieras internacionales más estrictas, un comercio global tensionado y precios de materias primas relativamente estables.

En conjunto, la región experimenta un “triple candado”: escaso espacio fiscal, elevada deuda pública y baja recaudación. Como destaca Moody's (2025), los altos niveles de endeudamiento y las tensiones políticas internas dificultan la capacidad de los gobiernos para realizar ajustes cuando las condiciones lo requieren, subrayando la urgencia de fortalecer los marcos fiscales e institucionales.

Cuando los Estados no logran satisfacer expectativas sociales —en sociedades con demandas crecientes y desconfianza acumulada— aumenta la frustración ciudadana y se erosiona la legitimidad política. Ello amplifica el riesgo de protestas, presiona la estabilidad macroeconómica y se convierte en un factor crítico dentro del riesgo político que los gobiernos de la región deben anticipar y gestionar.

Deuda bruta del gobierno general (porcentaje del PIB)

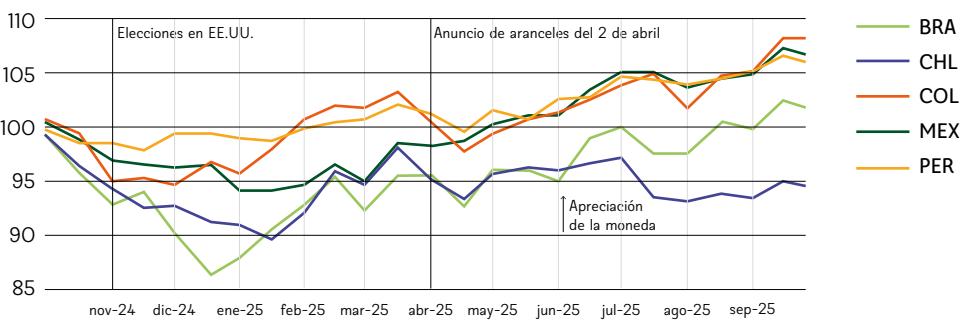
Fuente: FMI, Informe de las Américas.



Tipos de cambio frente al dólar

Base 100 = oct. 2024

Fuente: Banco de España 2025.



4.

Instrumentalización política de la migración



“La migración forzada ha mutado de ser una consecuencia colateral de las crisis a convertirse en una herramienta deliberada de política exterior y doméstica”, sostiene Kelly M. Greenhill (2010) en su teoría sobre la ingeniería de la migración estratégica. Bajo esta lógica, el escenario latinoamericano hacia 2026 presenta un riesgo sistémico: los flujos migratorios ya no se gestionan prioritariamente bajo criterios humanitarios o demográficos, sino que se instrumentalizan como activos de negociación diplomática, insumos para la competencia electoral —particularmente bajo narrativas de populismo punitivo— o como válvulas de alivio económico y social.

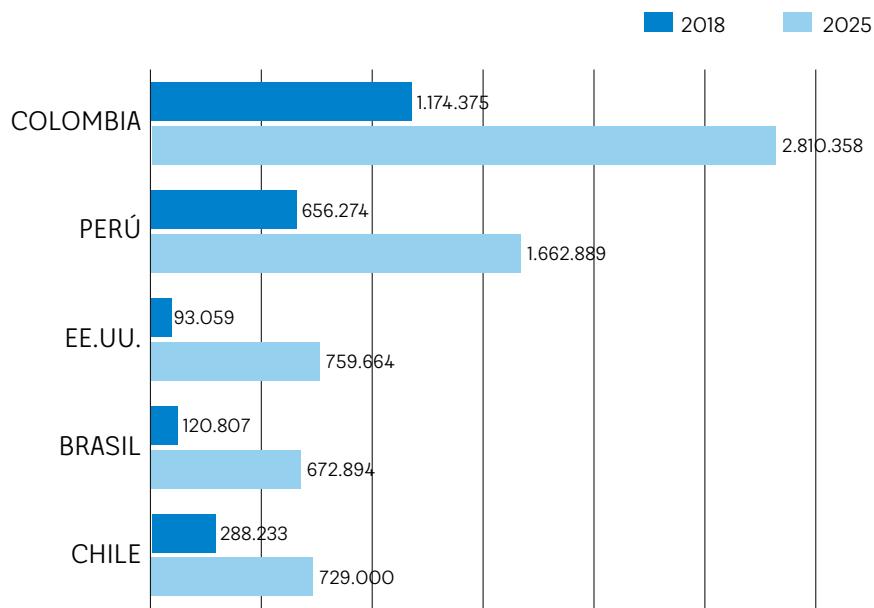
Dos dinámicas principales estructuran esta gestión política de la migración. La primera es de carácter externo y diplomático. En este plano, la administración mexicana ha perfeccionado el uso del control migratorio como moneda de cambio frente a Estados Unidos: la contención en la frontera sur funciona como mecanismo para evitar sanciones comerciales, presiones arancelarias o injerencias políticas. Sin embargo, hacia 2026 esta ecuación enfrenta una variable disruptiva: el endurecimiento de la política migratoria estadounidense y la amenaza de deportaciones masivas. Este giro no solo presiona a los países de tránsito para operar como “terceros países seguros” de facto, sino que introduce el riesgo de una reversión de flujos hacia el sur, desbordando las capacidades institucionales de México y Centroamérica. El resultado potencial es una doble crisis simultánea: la gestión de quienes intentan avanzar hacia el norte y la de quienes son forzadamente retornados.

En un nivel más profundo opera la denominada “válvula de escape autoritaria”. Regímenes como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba utilizan la expulsión masiva de ciudadanos como estrategia de supervivencia política. Al forzar el desplazamiento de millones de personas, estos gobiernos reducen la presión social interna y exportan la disidencia, al tiempo que transfieren costos políticos, sociales y fiscales a los países receptores —principalmente Colombia, Perú, Chile y Costa Rica—. Según R4V (2024), más de 7,7 millones de venezolanos se encuentran desplazados, configurando una presión demográfica que obliga a los Estados receptores a sentarse en la mesa de negociación con el régimen emisor, otorgándole una legitimidad de facto.

Cómo ha crecido la migración venezolana en los principales países receptores

Millones de migrantes y refugiados.

Fuente: Acnur 2024 y Geopolaris 2025.



Esta dinámica se ve reforzada por la dependencia estructural de las remesas como soporte macroeconómico. Para los países emisores, la migración no solo cumple una función política, sino que se transforma en un pilar financiero. De acuerdo con el Banco Mundial (2024), las remesas representan porcentajes significativos del PIB en varios países de Centroamérica y el Caribe, operando como una red de protección social privada que el Estado no provee. Este flujo constante de divisas genera un incentivo perverso: abordar las causas estructurales de la migración implicaría, paradójicamente, poner en riesgo una fuente clave de ingresos externos y estabilidad cambiaria. En este contexto, la expulsión de ciudadanos se consolida como una política económica implícita.

La segunda dinámica es de carácter interno y electoral, marcada por la instrumentalización de la xenofobia. En el Cono Sur, la gestión migratoria ha sido crecientemente capturada por narrativas de seguridad nacional. Chile y Perú enfrentan ciclos políticos en los que la migración se convierte en eje central del debate electoral. La limitada capacidad estatal para integrar a los migrantes, sumada al avance de organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua, ha permitido establecer una asociación mecánica entre migración y delincuencia. El riesgo hacia 2026 es la normalización de estados de excepción fronterizos y la militarización

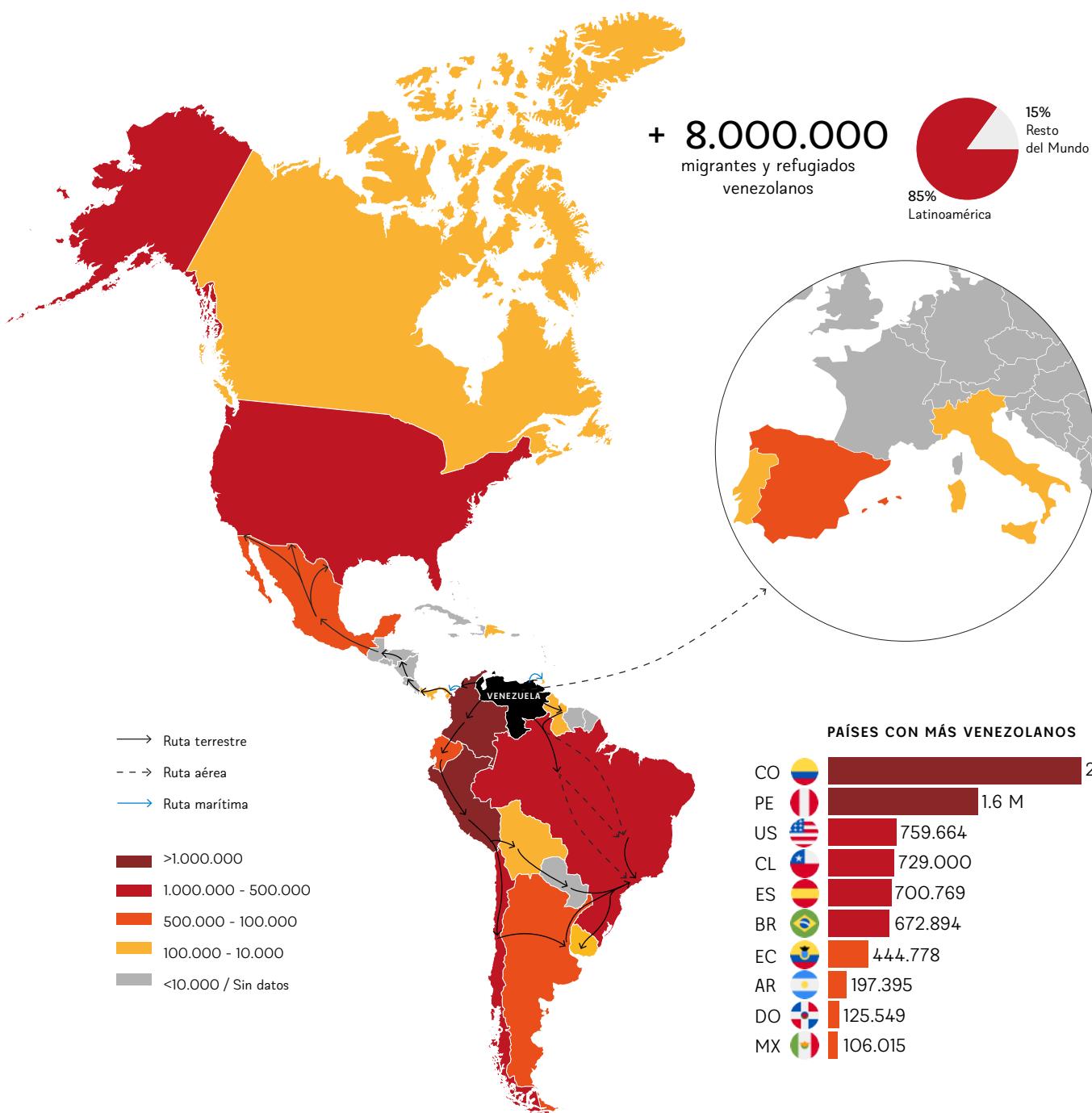
permanente de los límites territoriales. Aunque estas medidas ofrecen retornos electorales inmediatos al proyectar control y autoridad, su eficacia estructural es limitada y, en muchos casos, conduce a la diversificación de rutas más peligrosas en lugar de una reducción efectiva de los flujos (Orozco, 2024).

Este escenario sugiere que, hacia 2026, la migración dejará de ser percibida como un problema a resolver para consolidarse como un recurso a explotar. La cooperación regional —históricamente frágil— corre el riesgo de colapsar bajo un sistema de incentivos alineado con la confrontación: los países emisores externalizan costos exportando población; los países de tránsito capitalizan el control migratorio como peaje político; y los líderes de los países receptores obtienen réditos electorales prometiendo expulsiones difícilmente ejecutables.

La consecuencia es un bloqueo de cualquier solución integral. Mientras los migrantes continúen siendo tratados como fichas de negociación diplomática o chivos expiatorios electorales, las políticas públicas tenderán a privilegiar la contención simbólica y espectacular por sobre una gestión racional y coordinada. América Latina se encamina así hacia un equilibrio de hostilidad coordinada, donde las fronteras se transforman en el principal escenario de fricción diplomática y de tensiones de baja intensidad, con efectos duraderos sobre la gobernabilidad regional.

El éxodo venezolano. Número de venezolanos por país

La migración y el éxodo venezolano es una de las más grandes del mundo, con más de 7.5 millones de ciudadanos viviendo fuera de sus fronteras.
Fuente: Fair Politik. R4V (Junio 2024) *Rutas migratorias simplificadas y Geopolaris 2025.



5.

Fragilidad ante el cambio climático



América Latina llega a 2026 con un deterioro visible de su entorno climático y con márgenes de adaptación aún insuficientes. Tras tres años consecutivos de récords de temperatura global, la región ingresa a una fase en la que el calor extremo, la alteración de los regímenes de precipitación y la mayor frecuencia de eventos severos dejan de ser episodios excepcionales para convertirse en amenazas de carácter estructural. Esta tendencia eleva la probabilidad de olas de calor más prolongadas, temporadas secas más exigentes y eventos de lluvia más intensos, con impactos directos y persistentes sobre actividades productivas, infraestructura crítica y centros urbanos. La combinación entre alta exposición geográfica —Amazonía, cordillera andina, Caribe y extensas zonas costeras—, fuerte dependencia de recursos naturales y brechas de resiliencia institucional amplifica la velocidad y la magnitud de los impactos económicos y políticos en comparación con otras regiones.

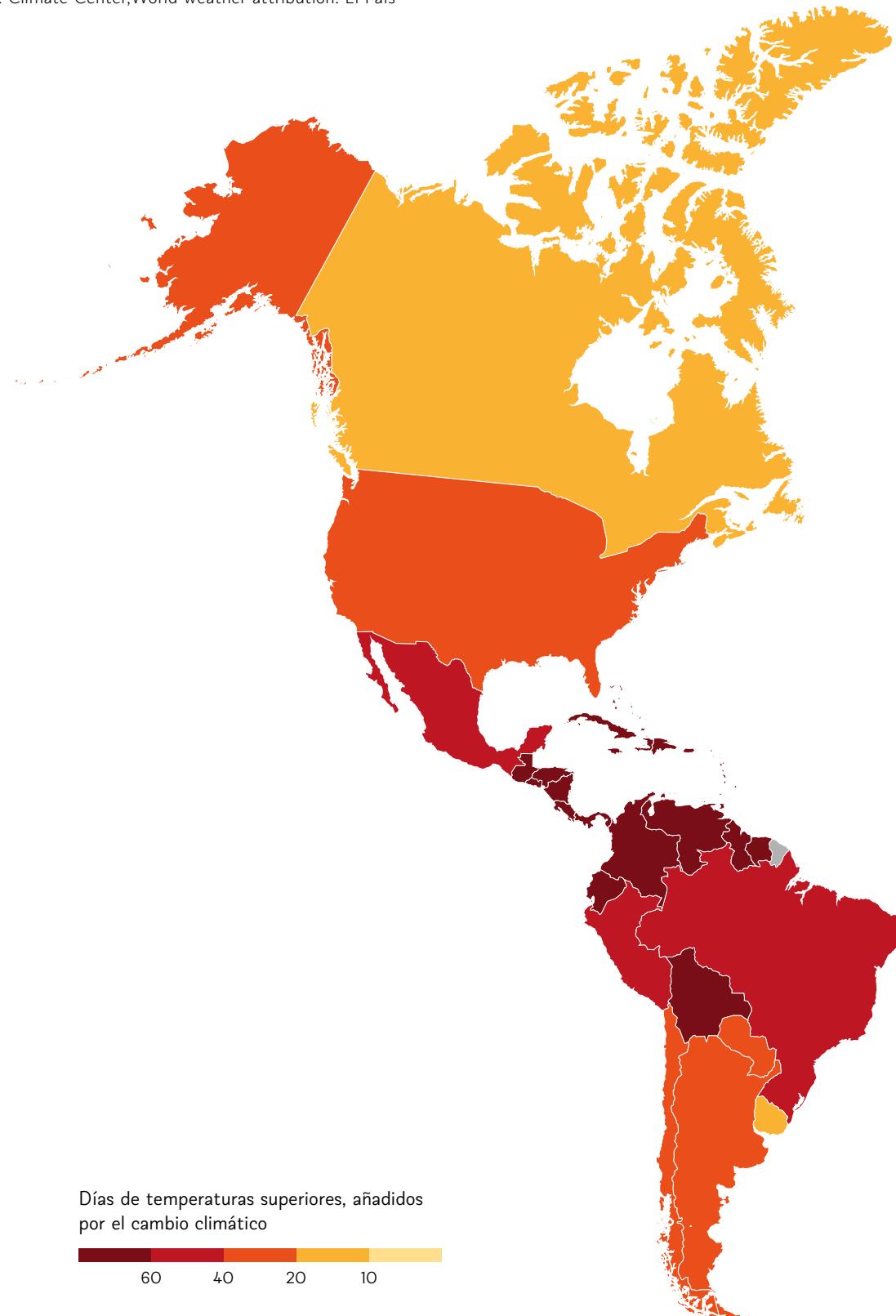
La exposición al riesgo climático es heterogénea y responde principalmente a factores territoriales, demográficos y ambientales. Países como Brasil, México, Perú, Colombia y Chile presentan niveles elevados de vulnerabilidad hacia 2026 debido a la alta concentración de población e infraestructura en zonas expuestas a sequías, incendios forestales, inundaciones, aluviones y estrés hídrico. A ello se suma la localización de activos estratégicos en áreas sensibles a variaciones extremas de temperatura y precipitación, así como la coexistencia de múltiples riesgos climáticos dentro de un mismo territorio. En regiones como la Amazonía, la cordillera andina, las zonas costeras y los valles centrales, la combinación de exposición física, degradación ambiental y limitada capacidad de adaptación territorial transforma al cambio climático en un riesgo estructural, más que coyuntural.

Desde el punto de vista económico, la vulnerabilidad se concentra en tres frentes. Primero, la agricultura y la seguridad alimentaria: la mayor volatilidad climática, junto con olas de calor más extensas, presiona los rendimientos agrícolas y eleva la volatilidad de los precios internos de alimentos, afectando especialmente a países con alta ruralidad y sistemas logísticos frágiles. Segundo, el agua: el estrés hídrico se consolida como un riesgo transversal para el consumo humano, la minería, la industria y el riego. La pérdida acelerada de glaciares andinos y

Anomalías de temperatura en América

En días de calor y días de altas temperaturas añadidos por el cambio climático.

Fuente: Climate Center, World weather attribution. El País (2025)

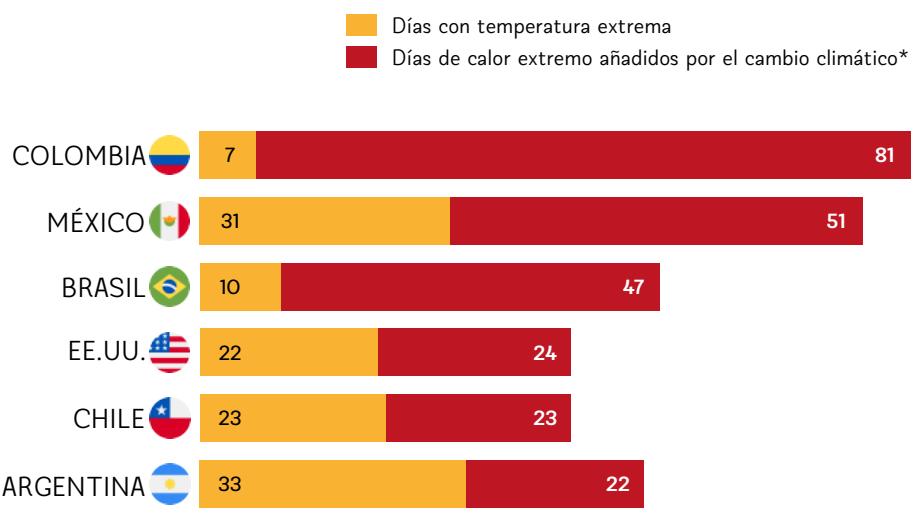


El incremento de temperatura por el cambio climático

Datos entre el 1 de mayo de 2024 y el 1 de mayo de 2025. Registros en los que la temperatura superó el percentil 90.

*Según publicación del diario *El País* (2025), la gráfica muestra que estudios científicos comparan las temperaturas actuales con un escenario sin cambio climático, permitiendo identificar cuántos días de calor extremo se explican por el calentamiento global.

Fuente: Climate Center, World weather attribution. *El País* (2025).



la disruptión del ciclo hidrológico reducen reservas estratégicas en un contexto de demanda creciente. Tercero, la energía y la infraestructura crítica: la alta dependencia de generación hidroeléctrica expone a varios países a shocks de sequía prolongada, mientras que eventos de precipitación extrema dañan carreteras, puentes y redes urbanas, incrementando costos fiscales e incertidumbre para la inversión.

El resultado es una coexistencia creciente de extremos climáticos dentro de la región. Déficit hídrico e incendios se intensifican en partes del Cono Sur y la Amazonía, mientras zonas del Caribe y Centroamérica enfrentan lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos. La degradación amazónica introduce un riesgo adicional de alcance regional: la pérdida de cobertura forestal debilita los llamados “ríos voladores”, es decir, los flujos de humedad atmosférica que la Amazonía recicla hacia otras zonas de Sudamérica. Este proceso aumenta la probabilidad de sequías más extensas y persistentes, con efectos directos sobre la agricultura, la generación hidroeléctrica y la estabilidad de los ecosistemas.

El impacto social y político actúa como amplificador de estos riesgos. Los desastres recurrentes afectan de manera desproporcionada a comunidades pobres y rurales, con menor acceso a

infraestructura resiliente, sistemas de emergencia y financiamiento para la reconstrucción. Ello profundiza desigualdades preexistentes y favorece procesos de migración interna y transfronteriza. En economías caracterizadas por bajo crecimiento y limitado espacio fiscal, la acumulación de shocks climáticos eleva el riesgo de conflictividad social asociada al acceso al agua, la energía, los subsidios agrícolas, la reconstrucción tardía y el deterioro de los medios de vida rurales.

Este deterioro ocurre, además, en un contexto de debate político fragmentado en torno al cambio climático. Si bien existe consenso científico, en varios países persisten discursos que minimizan o relativizan la magnitud del fenómeno, retrasando la adopción de políticas de adaptación y mitigación de largo plazo. La polarización del debate climático dificulta decisiones estructurales en ordenamiento territorial, gestión hídrica, prevención de incendios y protección de bosques. En ausencia de avances sostenidos en estos ámbitos, la vulnerabilidad climática seguirá escalando en 2026 como un riesgo político y económico central para América Latina, afectando no solo la estabilidad ambiental, sino también la gobernabilidad, la cohesión social y el crecimiento económico sostenible de la región.

6.

Debilitamiento del sistema internacional y redefinición del comercio global



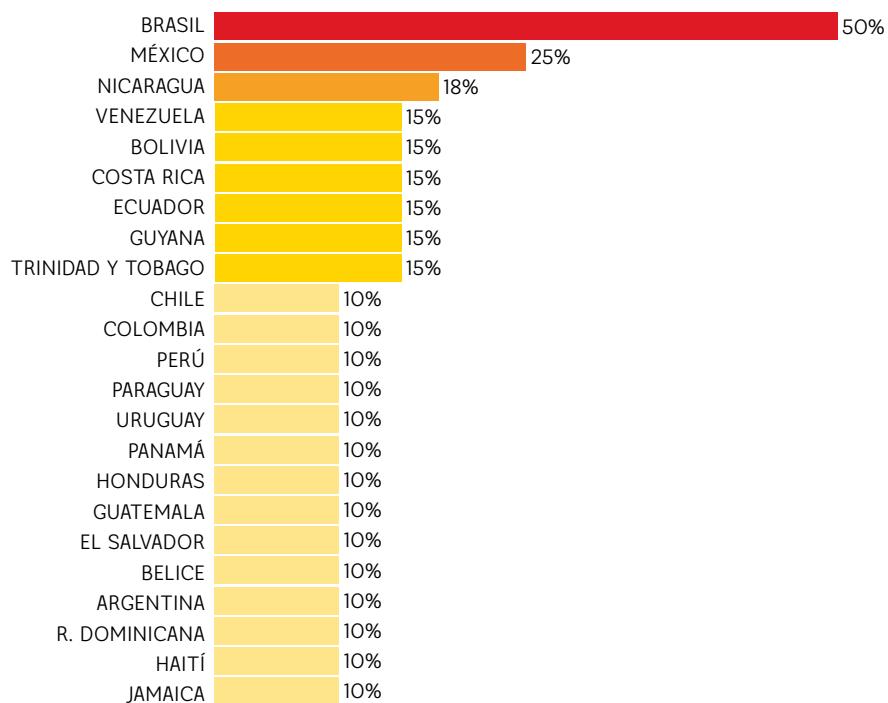
El orden internacional basado en reglas ha ido cediendo progresivamente ante un sistema cada vez más transaccional, en el que lo multilateral pierde centralidad frente a lo bilateral y donde el uso de la fuerza –económica, política y estratégica– se re legitima como instrumento de política exterior. Se trata de un sistema internacional en fase de deterioro, con un orden liberal crecientemente cuestionado y donde la principal potencia que históricamente promovió estos principios, Estados Unidos, emerge hoy como uno de sus críticos más visibles.

En este contexto, el segundo mandato de Donald Trump ha profundizado el retroceso del multilateralismo y acelerado el avance del proteccionismo económico. La Organización Mundial del Comercio (OMC) enfrenta un debilitamiento estructural, marcado por el bloqueo prolongado de su Órgano de Apelación, el estancamiento definitivo de la Ronda de Doha y un cuerpo normativo que no se ha adaptado a las nuevas realidades del comercio internacional. En la práctica, el principal organismo encargado de canalizar institucionalmente las disputas comerciales carece hoy de capacidad efectiva de resolución.

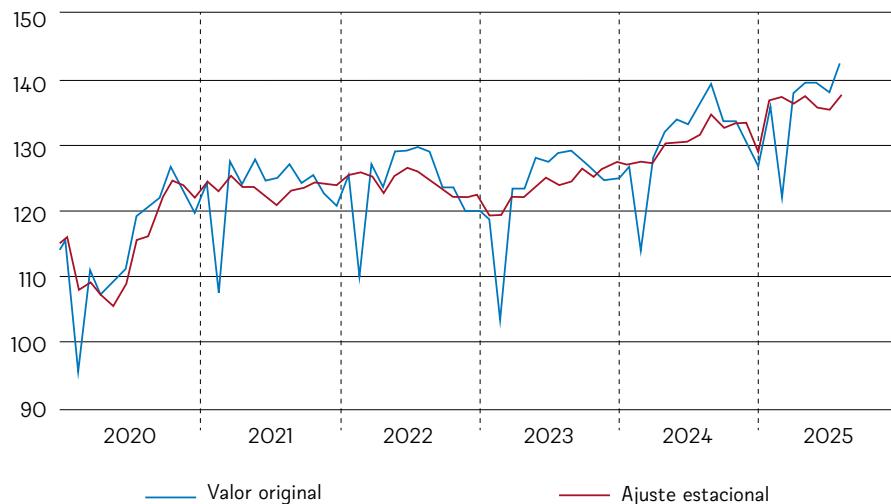
Si bien el comercio mundial mostró cierta resiliencia durante 2025, las perspectivas para el corto plazo son claramente menos favorables. Tras un crecimiento cercano al 2,4% en 2025, las proyecciones apuntan a una expansión de apenas 0,5% en 2026, como resultado directo del impacto de los aranceles y de la mayor incertidumbre comercial. De acuerdo con UNCTAD (2025), **Estados Unidos representa cerca del 13% del comercio global, por lo que sus medidas unilaterales están generando desviaciones de comercio hacia mercados con mejores condiciones de acceso. China, en particular, ha intensificado la redirección de sus exportaciones hacia Asia, profundizando la reconfiguración de los flujos comerciales globales.**

El debilitamiento del multilateralismo también se expresa en el sistema de Naciones Unidas, tanto a través de la parálisis política del Consejo de Seguridad como de una crisis financiera estructural que limita su capacidad operativa, con un déficit cercano a los USD 5 mil millones. Pese a los reiterados llamados a reformas formulados por sucesivos secretarios generales, los avances concretos han

Aranceles actualizados de EE.UU. a los países de América Latina
 Fuente: Bloomberg en línea



Índice de rendimiento de contenedores RWI/ISL
 2015=100
 Cálculos RWI/ISL basados en datos proporcionados por 90 puertos. Julio de 2025: estimación preliminar
 Fuente: Administración General de Aduanas de China, Haver Analytics



sido marginales, quedando mayoritariamente en el plano de las declaraciones y consensos retóricos.

Las tensiones en Medio Oriente, la prolongación de la guerra en Ucrania y el aumento global de barreras arancelarias han configurado un entorno de alta incertidumbre internacional, con impactos

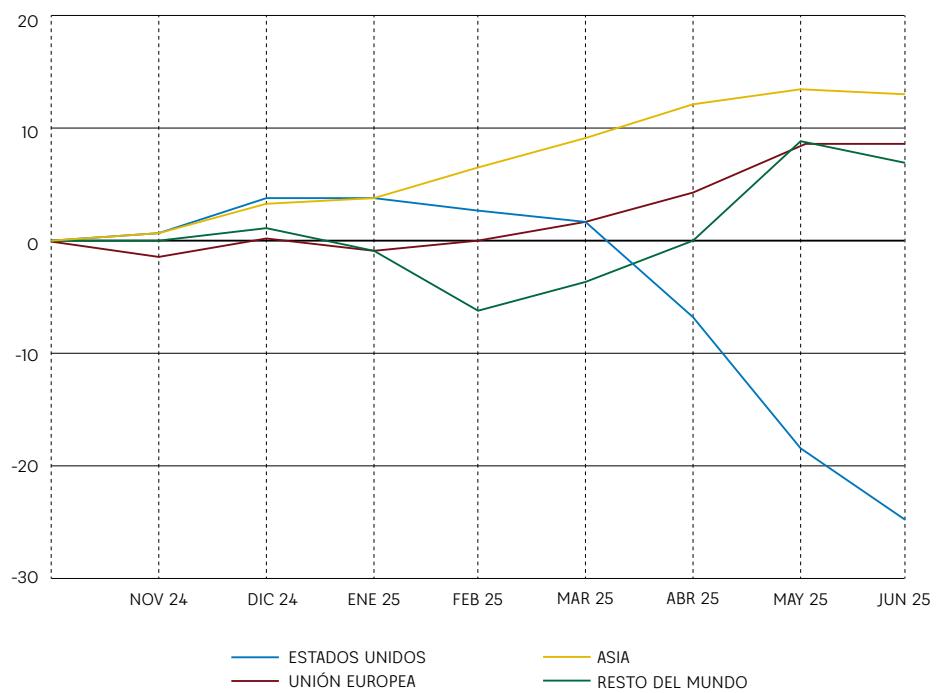
económicos diferenciados. En América Latina, estos efectos han sido moderados pero desiguales. Algunas economías han experimentado caídas en las remesas, con efectos directos sobre el consumo interno, mientras que la respuesta frente a los aranceles ha sido heterogénea. Argentina, Chile, Colombia y

Exportaciones acumuladas de China por destino (en porcentajes)

Las tasas de crecimiento se calculan utilizando promedios móviles de tres meses de las exportaciones de bienes ajustadas estacionalmente, valoradas FOB (Free On Board)

Fuentes: Administración

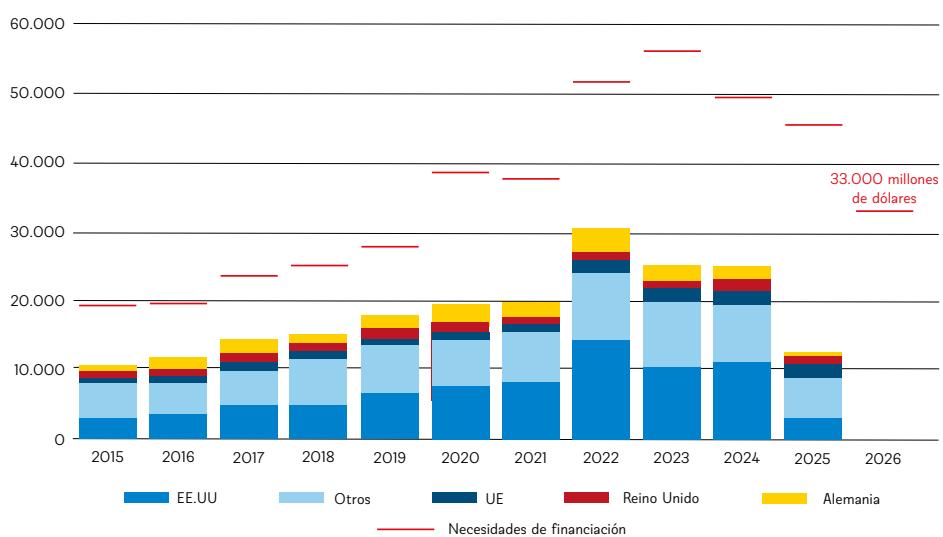
General de Aduanas de China,
Haver Analytics



Problemas de financiación de la ayuda humanitaria de la ONU

Contribuciones efectivas por país o región, en miles de millones de dólares.

Fuentes: Ocha (ONU)



Perú mostraron un mayor dinamismo exportador, mientras que Brasil y México registraron un crecimiento más contenido.

En 2025, Estados Unidos aplicó un arancel general del 10% a la región, excluyendo a los socios del T-MEC en sectores estratégicos como agroindustria, electrónicos y eléctricos, químicos, textil-calzado, dispositivos médicos y maquinaria. Brasil enfrentó un aumento temporal de aranceles de hasta 50% por razones políticas, con posteriores reducciones selectivas en productos como carne bovina, vegetales, café y cacao. El resto de los países latinoamericanos

quedó sujeto al arancel universal del 10%, en un contexto de negociaciones aún abiertas y alta incertidumbre regulatoria.

De cara a 2026, UNCTAD anticipa un escenario particularmente desafiante, caracterizado por menor crecimiento global, mayor fragmentación geopolítica, persistente incertidumbre comercial y un aumento sostenido de los costos del comercio internacional, factores que seguirán condicionando las estrategias de inserción externa y el desempeño económico de la región.

7.

Creciente presión de EE.UU. y China sobre la región



América Latina enfrenta la necesidad de recalibrar su relación con las dos principales potencias globales —Estados Unidos y China—, que concentran una parte sustantiva de su comercio exterior, inversión y financiamiento. En un escenario de creciente presión geopolítica, marcado por una administración Trump orientada a reforzar la seguridad económica en el hemisferio y a contener la proyección china, los países de la región se ven forzados a actuar bajo una lógica de “realismo estratégico”, equilibrando intereses económicos con consideraciones de seguridad y autonomía política. Mientras Estados Unidos ha endurecido sus políticas migratorias, comerciales y el uso de sanciones económicas, China ha respondido ampliando su presencia financiera en la región, anunciando líneas de crédito por USD 9.000 millones. **Si bien Washington ha sido históricamente el actor dominante, en las últimas dos décadas Beijing se ha consolidado como un socio estructural a través del comercio, la inversión directa y el financiamiento de infraestructura, reduciendo el margen de exclusividad estadounidense en el hemisferio.**

Los datos posteriores a la pandemia confirman un aumento significativo de las exportaciones latinoamericanas hacia China, seguido por Estados Unidos y la Unión Europea, aunque con niveles de dependencia altamente heterogéneos. México destina cerca del 81 % de sus exportaciones al mercado estadounidense, mientras Brasil apenas un 11,3 %. Según Bloomberg (2025), en el Cono Sur se observa un desplazamiento relativo de Estados Unidos: Chile dirige cerca del 40 % de sus exportaciones a China, Brasil alrededor del 32 %, Perú cerca del 30 % y Uruguay aproximadamente el 24 %.

La competencia estratégica entre Estados Unidos y China ha reconfigurado las relaciones políticas y de seguridad en América Latina, con dinámicas diferenciadas por subregión. En Centroamérica y el Caribe, predomina una agenda de seguridad, migración y control territorial, mientras que en América del Sur la disputa adopta un carácter geopolítico y geoeconómico, vinculado al control de recursos naturales estratégicos, infraestructura crítica y cadenas de suministro.

En este marco se consolida la denominada “Doctrina Donroe”, sustentada en un nuevo “Corolario

Apertura comercial con las grandes potencias. 2023

Indicador de apertura comercial (exportaciones más importaciones / PIB) con China y EE.UU. en porcentajes del PIB de cada país y número de veces en que el comercio (es decir la suma de exportaciones e importaciones) con EE.UU. supera al comercio con China.

Fuente: elaboración CELAG DATA a partir de COMTRADE/UN.

	Comercio total (expo + impo) / PIB			Veces que el comercio con EE.UU. supera al de China b/a
	con China	Con EE.UU.	China + EE.UU.	
	a	b	a+b	
MÉXICO	5,6%	44,9%	50,5%	8,0
NICARAGUA	4,8%	40,9%	45,6%	8,5
HONDURAS	5,6%	36,7%	42,3%	6,6
COSTA RICA	6,6%	23,1%	29,7%	3,5
CHILE	18,6%	10,5%	29,2%	0,6
ECUADOR	11,5%	14,5%	25,9%	1,3
EL SALVADOR	5,3%	20,1%	25,4%	3,8
PERÚ	14,1%	8,0%	22,0%	0,6
REP. DOMINICANA	4,1%	16,8%	20,8%	4,1
GUATEMALA	4,7%	14,4%	19,1%	3,1
COLOMBIA	5,2%	9,5%	14,7%	1,8
PARAGUAY	5,3%	7,1%	12,3%	1,3
VENEZUELA	4,3%	6,5%	10,9%	1,5
URUGUAY	6,9%	3,6%	10,5%	0,5
BOLIVIA	5,7%	2,1%	7,8%	0,4
ARGENTINA	2,7%	2,8%	5,5%	1,0
PROMEDIO	6,9%	16,3%	23,3%	2,4
CENTRO AMÉRICA Y EL CARIBE	5,2%	25,3%	30,5%	4,9
CONO NORTE	8,8%	10,2%	17,2%	1,3
CONO SUR	7,8%	5,2%	13,1%	0,7

Trump” a la Doctrina Monroe, incorporado en la **Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos** (2025). Esta estrategia, centrada en la defensa prioritaria de los intereses estadounidenses bajo el principio de America First, incrementa las presiones sobre los gobiernos latinoamericanos y reduce los márgenes de autonomía estratégica que tradicionalmente caracterizaron la diplomacia regional.

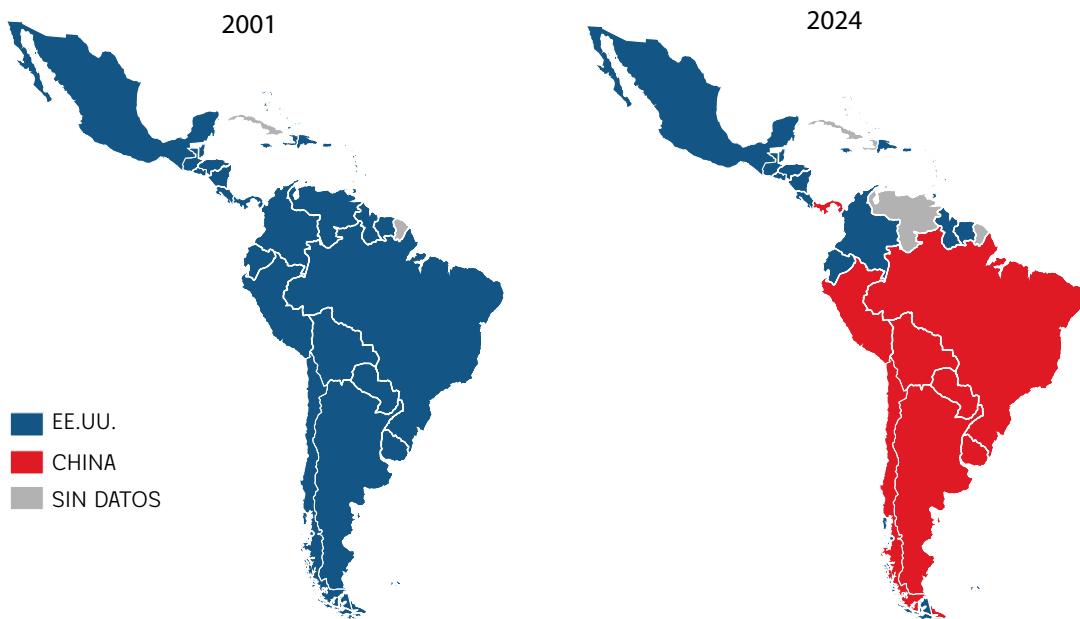
En paralelo, China continuará profundizando su estrategia de consolidación geoeconómica en América Latina mediante inversión, financiamiento y acuerdos comerciales, con foco en transición energética, infraestructura crítica, litio, cobre, agricultura y tecnología digital, tal como lo establece su **Policy Paper on Latin America** publicado el año pasado.

Las respuestas nacionales reflejan trayectorias divergentes. En el norte de la región, México gestiona una interdependencia compleja con Estados Unidos, bajo presiones arancelarias y crecientes exigencias en materia de seguridad. En Centroamérica y el Caribe, Cuba y Nicaragua enfrentan sanciones y operaciones encubiertas; Nicaragua, además, es señalada como un actor central en redes de narcotráfico. En contraste, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras han tendido al alineamiento con Washington, en gran medida como respuesta a crisis internas de seguridad.

En Panamá, Donald Trump llegó a afirmar que China “operaba” el Canal y amenazó con “recuperarlo” para frenar su vinculación con Beijing. Venezuela ha sido objeto de una presión estadounidense creciente, incluyendo despliegues militares orientados a forzar la salida de Nicolás Maduro.

Principales socios comerciales de América Latina, entre EE.UU y China

Fuente: FLARblog, ITC-TradeMap.



Ecuador mantiene una estrecha cooperación en seguridad con Estados Unidos, aunque el referéndum del último trimestre de 2025 rechazó la instalación de bases militares extranjeras. En Bolivia, la elección presidencial reconfigura el tablero regional por su acercamiento a Washington. Chile, pese a diferencias ideológicas con el gobierno de Boric, ha sostenido una posición intermedia, preservando la estabilidad comercial y la exclusión del cobre de nuevos aranceles. En Argentina, Estados Unidos ha buscado limitar la influencia china en sectores estratégicos como energía y en el swap de monedas. Paralelamente, los negocios con China y sus empresas estatales han ganado posiciones en sistemas eléctricos, refinerías, redes energéticas y puertos. Según Roy C. (2025), Council on Foreign Relations, esta expansión implica un creciente control sobre infraestructura crítica, bajo estándares propios en materia laboral y de sostenibilidad. Países como Bolivia, Brasil, Chile y Venezuela mantienen además cooperación con China en el desarrollo de tecnologías espaciales, mientras Beijing impulsa la inteligencia artificial, ciudades inteligentes y

redes 5G. No obstante, persisten las advertencias de Washington en materia de ciberseguridad y riesgos estratégicos.

En un entorno global cada vez más polarizado, y con un Estados Unidos más asertivo, varios países latinoamericanos podrían verse obligados a redefinir su relación con Beijing, generando nuevas tensiones políticas internas y dilemas de alineamiento estratégico que marcarán la agenda regional en el corto y mediano plazo.

8.

Escalada de tensión regional



El panorama internacional hacia 2026 se proyecta como una prolongación de la fragmentación y la competencia estratégica, consolidando un entorno de crisis aunque de baja intensidad en términos de conflicto bélico directo. Sus efectos, sin embargo, se transmiten de manera cada vez más directa y acelerada hacia América Latina. El orden internacional liberal, que ya exhibía fisuras relevantes, ha dado paso a una dinámica marcada por el uso más assertivo, transaccional y selectivo del poder, donde la primacía de intereses nacionales y consideraciones de seguridad desplaza a las lógicas multilaterales tradicionales. Este escenario de tensión sostenida se explica tanto por la continuidad de conflictos abiertos —como la guerra en Ucrania— y la inestabilidad crónica en Medio Oriente, como por la persistencia de focos de fragilidad que inciden directamente en el entorno regional, entre ellos la **crisis venezolana y las tensiones en el Caribe, ahora reconfiguradas tras la caída del régimen de Nicolás Maduro**.

A este contexto externo se suma una dinámica regional que dificulta la construcción de consensos. El lenguaje político confrontacional de algunos líderes latinoamericanos, que trasladan las relaciones internacionales al plano personal y adoptan posiciones públicas respecto de asuntos internos de otros países, ha erosionado la confianza diplomática y reducido los espacios de diálogo. Esta lógica, combinada con una estrategia implícita de “sálvese quien pueda”, limita las expectativas de coordinación regional efectiva y debilita la capacidad de respuesta colectiva frente a un entorno internacional más adverso, como quedó en evidencia ante la incapacidad regional de anticipar y gestionar el desenlace de la crisis venezolana.

La rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China se proyecta con creciente intensidad sobre América Latina, convirtiéndose en uno de los principales vectores de tensión regional. Las definiciones de política exterior de Estados Unidos, en el marco de la segunda presidencia de Donald Trump y reforzadas por la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, han profundizado la noción de “zonas de influencia”, donde el hemisferio occidental es concebido como un espacio prioritario de control estratégico. En este contexto, la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y su rol directo en precipitar el colapso del régimen venezolano

El refuerzo militar de Estados Unidos en el Caribe

Presencia militar de Estados Unidos en diciembre 2025.

Fuente: Guardian, Reuters.



◆ Bases militares

● Barcos

←→ Vuelos

💣 Ataques

✈ Aeropuertos con presencia estadounidense

Estados Unidos parece estar mejorando las instalaciones en sus territorios de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Se ha desplegado un gran número de buques de combate, incluido un portaaviones.

Una serie de aeronaves han estado activas en la región, incluyendo bombarderos estratégicos, drones, aviones de combate y aviones de patrulla.

Estados Unidos ha llevado a cabo más de 20 ataques contra presuntos barcos narcotraficantes.



refuerzan esta lógica de intervención selectiva cuando se perciben amenazas a la seguridad regional. A ello se suma la noción de “seguridad económica”, que implica mayores presiones sobre los socios para alinear políticas comerciales, tecnológicas y de inversión con los intereses estratégicos estadounidenses.

China, por su parte, se consolida como un actor económico clave en América Latina, no solo a través del comercio, sino también mediante financiamiento, inversión en infraestructura y una diplomacia activa. Este doble anclaje coloca a los países latinoamericanos bajo presiones simultáneas de ambas potencias, reduciendo su margen de maniobra y elevando los costos políticos de las decisiones de alineamiento o autonomía estratégica, en un escenario donde la región observa cómo las grandes definiciones de seguridad son crecientemente externalizadas.

El Caribe emerge, además, como un foco particularmente sensible de tensión regional. La intensificación previa de la presencia naval y aérea de Estados Unidos en la zona —formalmente bajo operaciones antinarcóticos— fue un antecedente directo del desenlace venezolano y anticipa un período de incertidumbre adicional. La caída del régimen abre un complejo proceso de transición política con riesgos de desorden interno, disputas entre facciones y reconfiguración de redes criminales, con efectos potenciales sobre las rutas marítimas, la seguridad energética y la continuidad de las cadenas de suministro regionales.

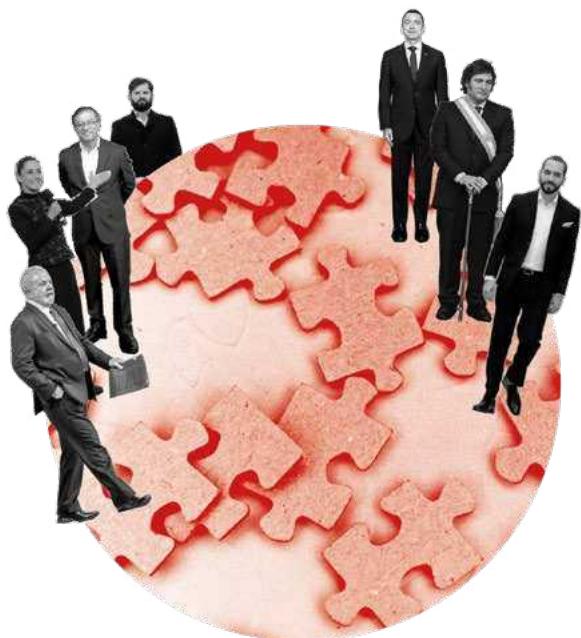
En este marco, la fragmentación regional se consolida como un factor estructural de vulnerabilidad. **La ausencia de una respuesta coordinada frente a la crisis venezolana —ni a través de mecanismos diplomáticos regionales, ni mediante instancias multilaterales hemisféricas— dejó en evidencia**

las limitaciones de América Latina para actuar de manera autónoma frente a amenazas que comprometen la estabilidad regional. A ello se suman las tensiones derivadas de la migración masiva intrarregional, que podría intensificarse nuevamente si la transición venezolana deriva en escenarios de violencia o pérdida de control territorial. En paralelo, América Latina enfrenta una constelación de focos de tensión de baja intensidad pero persistentes, que refuerzan un escenario de inestabilidad estructural. A la crisis venezolana, ahora en fase de transición incierta, se agregan presiones asociadas a la migración, al crimen transnacional y a disputas territoriales latentes —como el caso Colombia-Perú y otros diferendos no resueltos—. Si bien estos focos no configuran conflictos abiertos, generan fricciones constantes, condicionan la cooperación regional y amplifican los efectos de la rivalidad entre potencias en un contexto de limitada capacidad de coordinación política.

Para América Latina, esta escalada de tensiones se traduce en un aumento de vulnerabilidades de carácter estructural que afectan tanto la coordinación intrarregional como los márgenes de autonomía estratégica. La intensificación de presiones externas, la persistencia de focos de inestabilidad en su entorno inmediato y la **proyección directa de la competencia entre grandes potencias sobre el espacio latinoamericano** —ahora con precedentes concretos de intervención— dificultan la construcción de posiciones comunes y debilitan los mecanismos de cooperación. Al mismo tiempo, la creciente competencia por los recursos estratégicos de la región introduce riesgos adicionales de dependencia, tensiones políticas internas y conflictividad social, en un escenario donde las respuestas continúan siendo predominantemente nacionales y fragmentadas.

9.

Fragmentación regional y pérdida de peso a nivel global



Hacia 2026, América Latina opera en un escenario de creciente fragmentación institucional y diplomática que limita su capacidad de coordinación regional y de respuesta a problemas transnacionales complejos, como el crimen organizado, la migración irregular, el narcotráfico o la confrontación estratégica entre Estados Unidos y China, los dos principales socios comerciales de la región.

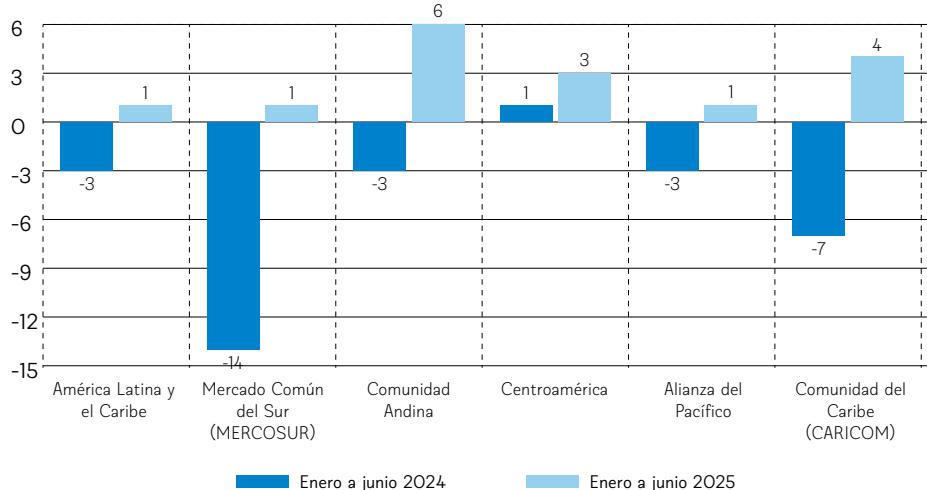
J.P. Morgan (2025) advierte que la divergencia ideológica entre gobiernos, los ciclos políticos cortos y la falta de convergencia en modelos de desarrollo dificultan la construcción de agendas comunes. **La ausencia de acuerdos mínimos y de una “affectio societatis” entre los líderes ha derivado en un enfoque de “sálvese quien pueda”, donde cada país aborda sus desafíos sin mayor articulación colectiva.**

Los principales mecanismos de integración muestran una capacidad limitada para avanzar de manera coordinada. En el caso del Mercosur, las tensiones crecientes entre Brasil y Argentina han erosionado la cohesión del bloque. Mientras Brasil responde a los aranceles del 50% impuestos por la administración Trump con una postura más defensiva, Argentina prioriza un acercamiento político-comercial hacia Washington. La Alianza del Pacífico enfrenta también limitaciones estructurales y diplomáticas que han reducido su capacidad de articulación. Si bien el bloque logró avances en reducción arancelaria, persisten brechas significativas en armonización normativa, movilidad laboral y marcos regulatorios. A ello se suman tensiones políticas entre Perú y México que, desde 2022, afectan directamente la cohesión del mecanismo.

Otros organismos regionales han mostrado también una capacidad limitada para incidir de manera significativa. La XVII Cumbre de los BRICS en Río de Janeiro (2025) marcó un punto de inflexión al consolidar la expansión del bloque y promover una nueva arquitectura financiera global. Bolivia, Cuba, México, Colombia, Uruguay y Chile fueron invitados por afinidades políticas, destacando el ingreso de Colombia al Nuevo Banco de Desarrollo. Sin embargo, la participación latinoamericana reavivó el debate sobre los costos geopolíticos de aproximarse a los BRICS.

América Latina y el Caribe y agrupaciones seleccionadas: variación interanual de las exportaciones de bienes a la región y a la respectiva agrupación, enero a junio de 2024 y 2025 (en porcentajes)

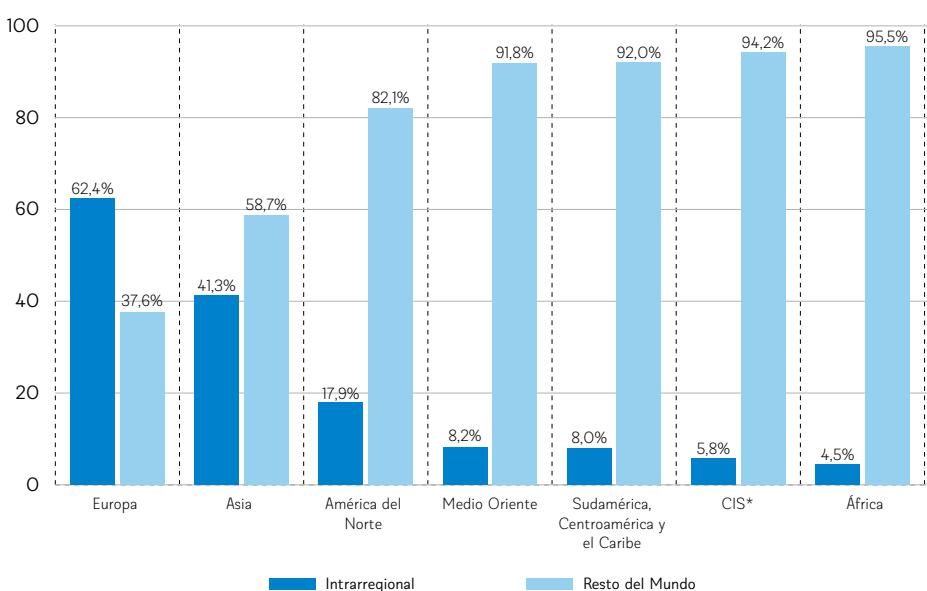
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de la región.



Exportaciones regionales por destino 2023

*Nota: Comercio Intrazona de servicios lo que demuestra la baja capacidad comercial intrazona en la región.

Fuente: OMS (2025).



La cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia, profundizó esta percepción. Solo 8 de 33 jefes de Estado asistieron, reflejando un deterioro en la articulación regional. Las divisiones entre Argentina, Ecuador y El Salvador, por un lado, y Brasil, Colombia, Chile y México, por otro, impidieron consolidar una postura común frente a Europa. El conflicto entre Gustavo Petro y Donald Trump por

la deportación masiva de colombianos agregó un nivel adicional de tensión que disuadió a varios gobiernos de participar y dificultó cualquier avance hacia una declaración conjunta.

La COP30 evidenció nuevamente la fragmentación regional: protestas, escasos avances y la ausencia de líderes clave —incluido Donald Trump— marcaron una cita en la que América Latina no logró articular

El mapa ideológico de América Latina en 2025
Fuente: Diálogo Político (2025).

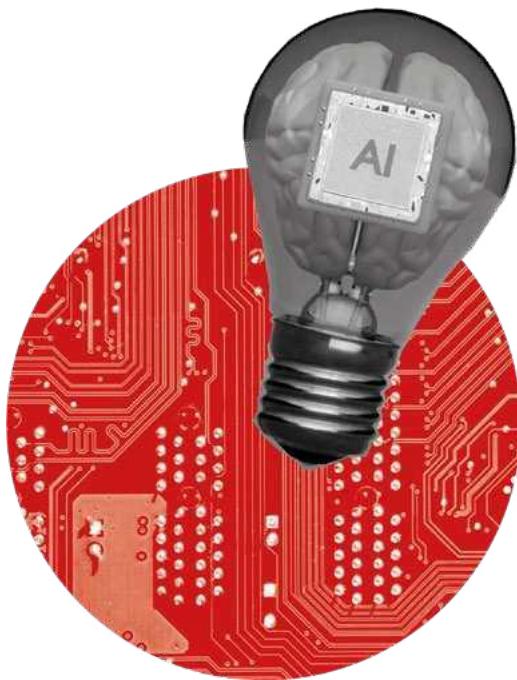


prioridades climáticas comunes. Aunque México y Brasil mostraron algunos gestos de acercamiento, sus agendas estratégicas siguen siendo divergentes. Brasil profundiza su alineamiento con los BRICS y México refuerza su integración al T-MEC, lo que limita la posibilidad de un liderazgo climático regional coordinado.

Las asimetrías económicas, la superposición de organismos regionales y la ausencia de mecanismos efectivos de implementación dificultan la adopción de compromisos comunes. La fragmentación regional termina arrastrando a América Latina a una irrelevancia en las grandes discusiones globales.

10.

Falta de capacidad frente a la inteligencia artificial



Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), elaborado por el INIA y la CEPAL, de cara al 2026 la región enfrenta desafíos estructurales que limitan la adopción de la IA. **Los principales obstáculos siguen siendo la baja inversión, la débil gobernanza de datos, la falta de regulación, la escasez de capacidades profesionales y el limitado desarrollo científico.** Sólo cuatro países —Brasil, Chile, Colombia y México— concentran el 1,12% de la inversión global en IA y cuentan con centros de datos robustos, lo que evidencia la alta concentración regional de capacidades tecnológicas.

Persisten también brechas profundas de acceso digital. En varios países, menos de un tercio de los hogares dispone de conexión estable o de dispositivos adecuados, lo que amplifica desigualdades en un momento en que la IA se incorpora crecientemente a servicios esenciales. Las asimetrías en banda ancha y cobertura 5G reflejan la urgencia de una planificación de largo plazo basada en equidad territorial y sostenibilidad.

Un estudio del PNUD (2023) muestra que, aunque el promedio regional de conexión fija alcanza el 67%, la mayoría de los países se sitúa en torno a ese nivel. Brasil, Chile y Ecuador lideran con alrededor del 70%. Sin embargo, Honduras, Guatemala y Nicaragua apenas alcanzan cerca del 25%, mientras que Haití registra una conectividad extremadamente limitada (6% de los hogares). Las brechas se amplían en zonas rurales: mientras cerca del 75% de los hogares urbanos tiene conexión fija, solo el 42% de los hogares rurales accede a este servicio. Perú y Bolivia presentan rezagos más marcados debido a condiciones topográficas que dificultan el despliegue de infraestructura, profundizando desigualdades territoriales.

La reconfiguración de cadenas globales y la transición energética ofrecen vectores estratégicos donde la IA agrega valor. El capital privado ha sido especialmente relevante en la consolidación de ecosistemas tecnológicos en Chile, Argentina y Uruguay. Sin un indicador específico de inversión en IA, el gasto público en I+D funciona como referencia: alcanza apenas un 0,33% del PIB regional, muy por debajo de las economías avanzadas. Chile, Brasil, México, Colombia y Uruguay lideran este indicador.

En gobernanza de datos persisten vacíos significativos. La falta de estandarización y de marcos robustos de protección expone a los usuarios a riesgos de uso indebido de datos y a posibles sesgos algorítmicos. Un estudio de *Journal of Democracy* (2023) muestra que chatbots y algoritmos pueden entregar respuestas con sesgos políticos detectables, subrayando la necesidad de avanzar en regulación y transparencia. Aunque Chile y México presentan progresos en apertura de datos, la mayoría de los países mantiene rezagos que obstaculizan la ciencia abierta y elevan la incertidumbre regulatoria. A ello se suma un riesgo creciente: los ciberataques potenciados por IA. Según Forbes (2025), el 60% de las empresas latinoamericanas que sufren un ataque cierra sus operaciones; solo en 2025 se registraron más de 66.000 incidentes en compañías de la región. Sin marcos regulatorios sólidos ni coordinación regional, esta vulnerabilidad seguirá aumentando.

En fortalecimiento de capacidades, las brechas son amplias. La IA depende críticamente del talento

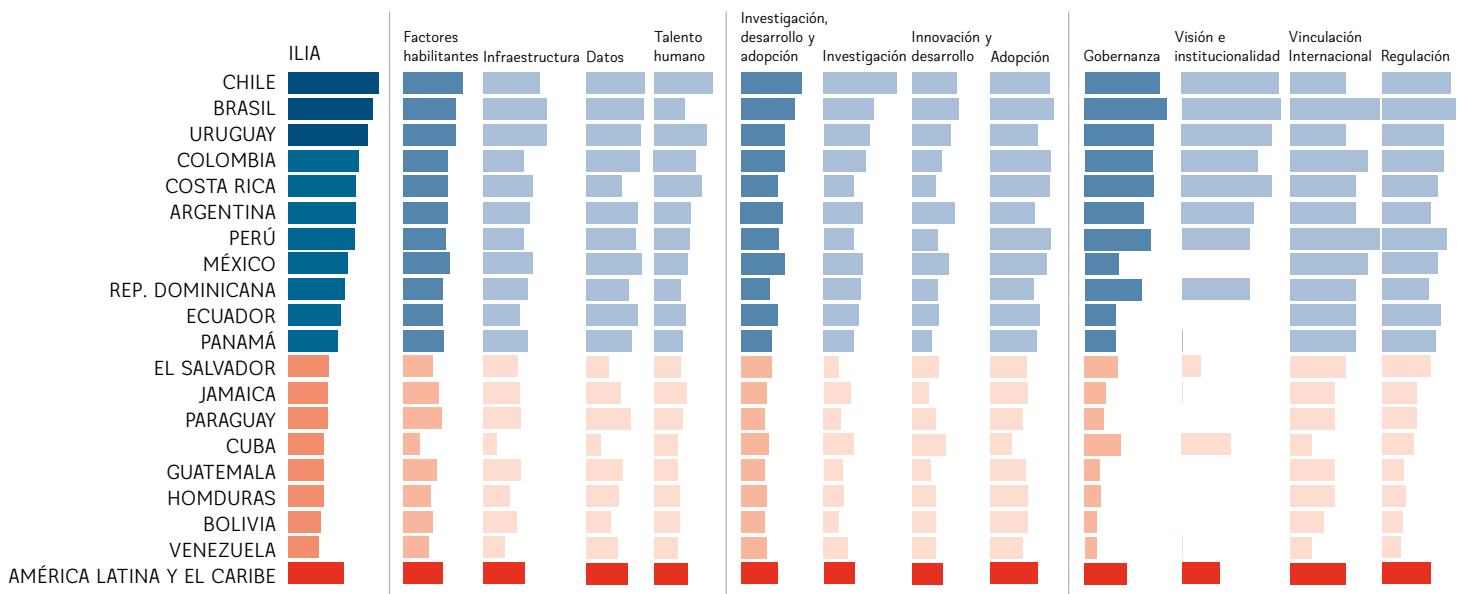
humano para desplegar su potencial, y la región muestra avances desiguales. Según el estudio del INIA y la CEPAL (2025), Costa Rica lidera en habilidades profesionales gracias a políticas integrales de educación, infraestructura y formación de talento. Colombia destaca por el aprendizaje autodidacta impulsado por plataformas digitales, mientras que Chile, Brasil y Uruguay sobresalen en desarrollo de capital humano especializado. En contraste, Paraguay, Cuba, Guatemala y Honduras se ubican en los últimos lugares del ranking.

América Latina corre el riesgo de profundizar su dependencia tecnológica en un contexto de elevada desigualdad. Los países pioneros cuentan con infraestructura, talento e innovación; los adoptantes avanzan a un ritmo intermedio; y otros mantienen un progreso limitado. Sin políticas coordinadas y estrategias nacionales robustas, la fragmentación digital y los riesgos de seguridad continuarán ampliándose, comprometiendo la competitividad regional en la economía del futuro.

Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025.

ILIA 2025: Puntaje total, por dimensión y subdimensiones (índice base 100)

Fuente: CEPAL (2025).



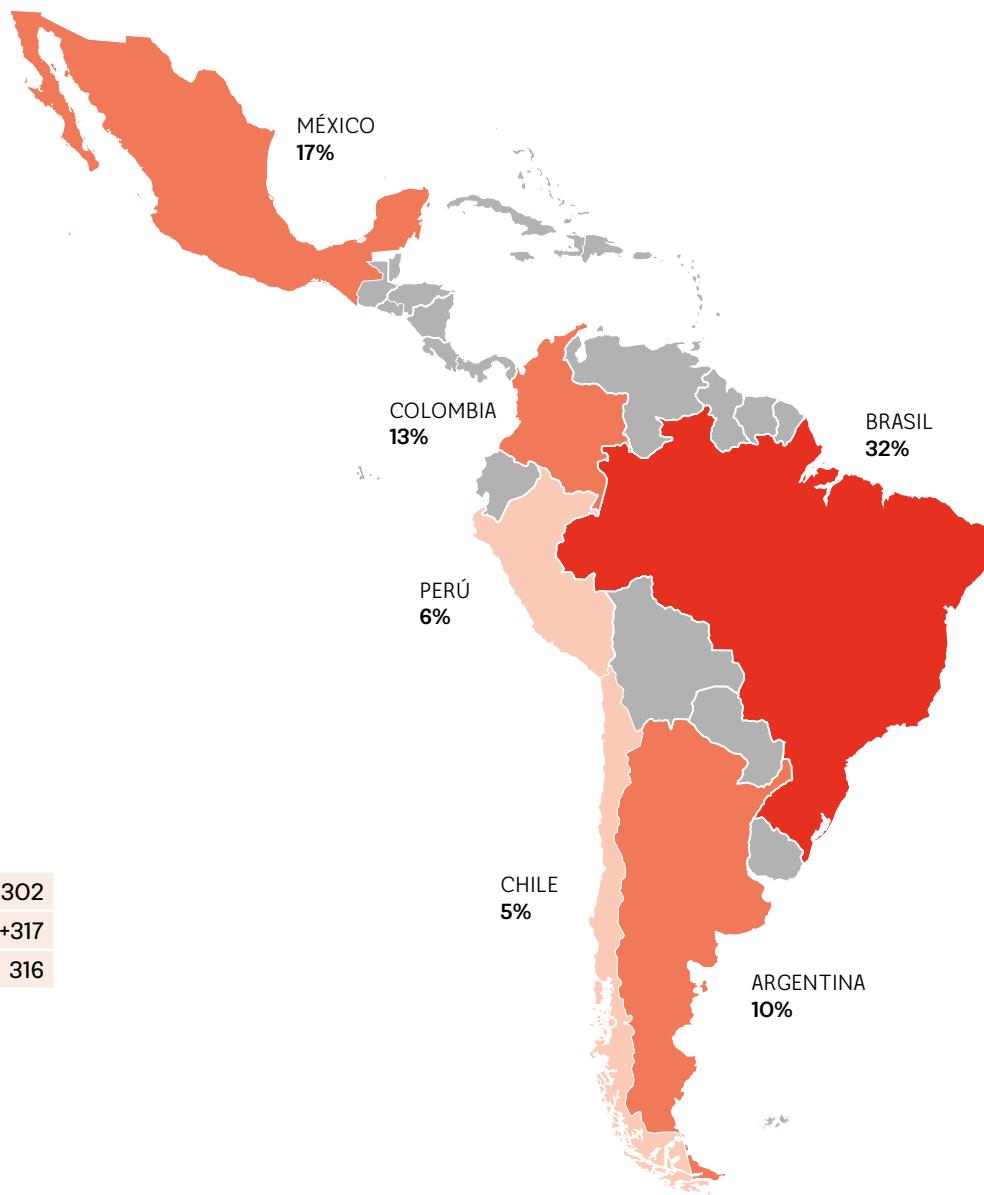
Top de países de LAC con ataques ransomware

Latinoamérica se ha convertido en un blanco interesante para grupos cibercriminales altamente sofisticados, obligando a las organizaciones a replantear sus estrategias de ciberseguridad.

Fuente: Bloomberg (2025).

Número de ataques
de ransomware en
Latinoamérica

2023	+302
2024	+317
2025 (21/10)	316



Calendario electoral de América Latina 2026



Comparación de riesgos

2021-2026

Nº	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Incapacidad del Estado	▲ Erosión democrática	▲ Crimen Organizado	= Inseguridad, crimen organizado y narcotráfico	= Inseguridad, crimen organizado y narcotráfico	= Crimen organizado y captura del Estado
2	Nueva ola de protestas violentas	N Cambio climático y escasez hídrica	▼ Retroceso democrático	N Aumento de corrupción e impunidad	= Corrupción estructural	▲ Violencia política y erosión democrática
3	Aumento de corrupción, narcotráfico y crimen organizado	▼ Protestas sociales y violencia	N Gobernabilidad compleja	▼ Desafección democrática. Avance del populismo y autoritarismo	▲ Nueva ola migratoria y deportaciones masivas	N Vulnerabilidad fiscal de los Estados
4	Mayor apoyo a líderes autoritarios y populistas	▲ Crisis migratoria	▼ Nuevos estallidos de malestar	▼ Gobernabilidad bajo presión y rápida pérdida de apoyo de los mandatarios	▼ Democracia sin delivery. Avance del autoritarismo	▼ Instrumentalización política de la migración
5	Inseguridad jurídica en los negocios y la inversión	▼ Economías ilícitas	▼ Crisis migratoria	= Aumento de flujos migratorios	▲ Desinformación y polarización tóxica	▲ Fragilidad ante el cambio climático
6	Crisis migratoria	N Polarización política	N Inseguridad alimentaria	▼ Radicalización de las protestas sociales	N Persistencia inflacionaria	▲ Debilitamiento del sistema internacional y redefinición del comercio global
7	Utilización de las Fuerzas Armadas	▼ Inversión extranjera en caída	▼ Polarización y noticias falsas	▲ Instabilidad internacional	▲ Agravamiento del cambio climático	▲ Creciente presión de EE.UU. y China sobre la región
8	Conflictivo geopolítico de Estados Unidos y China	▲ Irrelevancia regional	▼ Pérdida de competitividad	= Deterioro del clima de negocios	N Auge del proteccionismo	▲ Escalada de tensión regional
9	Parálisis de la integración regional	N Ciberdelitos	= Aumento de ataques cibernéticos	= Impacto de la tecnología en la política	▼ Irrelevancia regional	= Fragmentación regional y pérdida de peso a nivel global
10	Surgimiento de tensiones fronterizas	▼ Auge de China	▼ Debilitamiento de integración regional	N Vulnerabilidad frente al cambio climático	▼ Escalada de conflictos bélicos	N Falta de capacidad frente a la inteligencia artificial

Nota metodológica

Se aplica una encuesta de pregunta única en la que se le solicitaba a los encuestados responder la siguiente pregunta:

A continuación, se presenta una pregunta única, donde debe marcar en orden de importancia (1: más importante/10: menos importante) los principales riesgos políticos de la región para el 2026.

La muestra es de carácter no probabilístico, se utilizó un muestreo por conveniencia, distribuyendo el formulario por vías digitales a través de correo electrónico personalizado, correos masivos a público de interés general y distribución vía electrónica en general.

Para el Informe 2026 la muestra total es de **1.300** correspondientes al público en general. Al menos un 60% de respuestas obtenidas provienen de distintos países de la región.

A cada posición se le agregó un ponderador a fin de que si un encuestado X lista un riesgo A en primer lugar reciba un mayor valor en ponderado que aquel encuestado Y que lista el riesgo A en cualquier otro lugar inferior. Así, el primer lugar tiene una ponderación mayor que el segundo lugar y así sucesivamente.

Agradecimientos

El Centro de Estudios Internacionales UC (CEIUC) agradece la participación de los expertos, líderes de opinión, autoridades y académicos en relaciones internacionales de América Latina. Su tiempo y colaboración fueron de suma importancia para comprender la realidad de la región. Asimismo, agradecemos a las 1.300 personas que participaron en la encuesta y que permitieron visualizar los principales riesgos para este año. Gracias a la participación de expertos y el público en general, el índice Riesgo Político América Latina 2026 logra su **sexta edición** y se proyecta como un valioso insumo para la toma de decisiones de gobiernos, empresas y sociedad civil.

Editores



Jorge Sahd K.
Director CEIUC
Coeditor Riesgo Político



Daniel Zovatto
Investigador senior CEIUC
Coeditor Riesgo Político

Equipo redactor



Jannine Ullauri
Coordinadora de Proyectos CEIUC
Colaboradora Riesgo Político



Paola Serrano
Colaboradora Riesgo Político



Roberto Ovalle
Miembro asociado CEIUC

RIESGO POLÍTICA AMÉRICA LATINA 2026

EDITORES:

Jorge Sahd K.
Daniel Zovatto

EQUIPO:

Jorge Sahd K.
Daniel Zovatto
Jannine Ullauri
Roberto Ovalle
Paola Serrano

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

María Soledad Sairafi

Centro UC Estudios Internacionales CEIUC
Jaime Eyzaguirre 9 - 4º Piso - oficina 44.
Santiago centro - Chile.

<http://centroestudiosinternacionales.uc.cl/>
@cei_uc 

Centro de Estudios Internacionales UC 

@cei_uc 

@ceiuc 

Centro de Estudios Internacionales UC 

Santiago de Chile, enero de 2026

Centro UC
Estudios Internacionales
CEIUC



RIESGO
POLÍTICO
AMÉRICA
LATINA